

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 18 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 18 July 2016

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Équateur

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 18 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 18 juillet 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]



MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

No. 4-2-209/2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas, en ocasión de referirse a la Nota Nro. 4-2-126/2016 mediante la cual se comunicó a esa Secretaría que debido a los nuevos eventos telúricos suscitados en el Ecuador, y a fin de precautelar y garantizar la seguridad de sus poblaciones por los efectos adversos de este desastre natural, el Gobierno de la República del Ecuador renovó la declaratoria del estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1101 de 16 de junio de 2016.

Al respecto, la MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, tiene el honor de informar que de acuerdo al Artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1101 se han suspendido los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, contenidos en el Artículo 17 numeral 1, así como en el Artículo 12 numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS solicita comedidamente a la Secretaría de las Naciones Unidas que en apego al Artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comunique de tal medida a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 5 de diciembre de 2016

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York





**MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK**

No. 4-2-126/2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda muy atentamente a la Secretaría de la Organización, en ocasión de informarle que debido a los nuevos eventos telúricos suscitados en el Ecuador, el Gobierno de la República del Ecuador renovó la declaración de estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1101, a fin de precautelar y garantizar la seguridad de sus poblaciones por los efectos adversos de este desastre natural.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, en apego al Artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicita muy comedidamente a la Secretaría General comunicar de tal suspensión a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 11 de julio de 2016



A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York

Nº 1101

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*;

Que el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y oportunas;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que de conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo a través del organismo técnico establecido en la ley;

Que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaría de Gestión de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo;

Que de conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre; y, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;

Que el día de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos telúricos ubicados entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, en fechas posteriores hubo réplicas de aquellos;

Que en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena y Guayas, se produjeron efectos más adversos de los eventos telúricos y sus réplicas;

por ello fue necesario declarar el estado de excepción en dichas provincias; mediante decreto ejecutivo No. 1001 de 17 de abril de 2016.

Que siendo entendible la intención de los afectados por reanudar su propósito de vida ellos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física, en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y sus réplicas, por lo que es necesario tomar medidas para prevenir esos actos;

Que el Ministro de Coordinación de Seguridad mediante oficio No. MICS-DM-2016-0372 de 14 de junio de 2016, solicitó la renovación del estado de excepción.

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

DECRETA:

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos del desastre natural de 16 de abril de 2016 y sus réplicas.

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas; de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril de 2016 y sus réplicas;

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

Artículo 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

Artículo 6.- Esta renovación del estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas.

Artículo 7.- Notifíquese de esta renovación de la declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas que pretenden retomar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo, en las provincias de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

Artículo 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión Económica y Social; y la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Dado en Quito, a 16 de junio de 2016.



Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

[Permanent Mission of Ecuador
to the United Nations
New York]

No. 4-2-209/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and has the honour to refer to its note No. 4-2-126/2016, by which it informed the Secretariat that, owing to the most recent earthquakes in Ecuador, and to protect their populations from the adverse effects of that natural disaster and ensure their safety, the Government of the Republic of Ecuador extended the state of emergency in the provinces of Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos and Guayas, by Executive Decree No. 1101 of 16 June 2016.

In that regard, the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations has the honour to inform the Secretariat that, in accordance with article 3 of Executive Decree No. 1101, the rights relating to inviolability of the home and freedom of movement of those affected by the 16 April 2016 earthquake and its aftershocks in the provinces of Manabí and Esmeraldas, recognized in article 17, paragraph 1, and article 12, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights, have been suspended.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations respectfully requests, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that the United Nations Secretariat inform all States parties to the Covenant of this measure.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

[New York, 5 December 2016]

[Signed]

[Permanent Mission of Ecuador
to the United Nations
New York]

No. 4-2-126/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and wishes to inform the Secretariat that, owing to the most recent earthquakes in Ecuador, the Government of the Republic of Ecuador has extended the state of emergency in the provinces of Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos and Guayas, by Executive Decree No. 1101, in order to protect their populations from the adverse effects of that natural disaster and guarantee their safety.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations respectfully requests, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that the Secretariat inform all States parties to the Covenant of this suspension.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

[New York, 11 July 2016]

[Signed]

No. 1101

Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

Whereas:

Article 14 of the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the right of the population to live in a healthy and ecologically balanced environment that guarantees sustainability and good living (*buen vivir/sumak kawsay*);

Article 396 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall adopt timely policies and measures to avoid adverse environmental impacts where there is certainty of harm; and, that, in case of doubt as to the environmental impact stemming from a deed or omission, even where there is no scientific evidence of harm, the State shall adopt timely protective measures;

Article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall protect persons, communities and nature against the adverse effects of natural or man-made disasters through risk prevention, disaster mitigation, and the restoration and improvement of social, economic and environmental conditions with the aim of minimizing the condition of vulnerability;

Under article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador, the State shall exercise governance over the national decentralized system for risk management through the technical body established by law;

The Public and State Security Act establishes the National Risk Management Secretariat as the governing body of the national decentralized system for risk management;

In accordance with the relevant law, the technical body shall, among other functions, provide a liaison between institutions in order for them to coordinate actions to prevent and mitigate risk, as well as to address risk and restore or improve upon the conditions that existed prior to the occurrence of an emergency or disaster, and carry out and coordinate the necessary actions to reduce vulnerabilities and to prevent, mitigate, respond to and overcome the adverse effects of disasters or emergencies in the national territory;

On 16 April 2016, earthquakes occurred near the border between the provinces of Esmeraldas and Manabí, with subsequent aftershocks;

The most serious adverse effects of the earthquakes and their aftershocks occurred in the provinces of Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena and Guayas, necessitating the declaration of a state of emergency in those provinces, by Executive Decree No. 1001 of 17 April 2016.

As the affected persons, understandably anxious to resume their normal lives, are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk in the areas affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks, it is therefore necessary to take measures to prevent such acts;

The Minister of Security Coordination, in note No. MICS-DM-2016-0372 of 14 June 2016, requested an extension of the state of emergency.

In exercise of the powers conferred on him by articles 164, 165 and 166 of the Constitution of the Republic, and articles 29 and 36 et seq. of the Public and State Security Act,

Decrees:

Article 1. – The state of emergency is hereby extended in the provinces of Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos and Guayas, on account of the adverse effects of the natural disaster of 16 April 2016 and its aftershocks.

Article 2. – Provision shall be made for national mobilization in the provinces of Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos and Guayas; accordingly, all entities of the Central and Institutional Public Administration, and in particular the Armed Forces, the National Police and the autonomous governments of the provinces affected, shall coordinate their efforts to take all necessary and indispensable action to prevent and mitigate risks and to address, remedy and redress the adverse conditions caused by the earthquakes of 16 April 2016 and their aftershocks.

Article 3. – The rights to inviolability of the home and freedom of movement of persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks in the provinces of Manabí and Esmeraldas are suspended, as some citizens are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk. The Minister of Security Coordination shall determine the manner in which this measure shall be applied in order to achieve the aforementioned aim.

Article 4. – Such requisitions as are necessary to address the emergency shall be issued.

Requisitions shall be issued in cases of extreme necessity and in strict compliance with the laws applicable in such situations.

Article 5. – The Ministry of Finance shall allocate sufficient funds to address the state of emergency.

Article 6. – Extension of the state of emergency shall be in effect for thirty days from the signing of this Executive Decree. The territorial scope of application shall be the aforementioned provinces.

Article 7. – The National Assembly and the Constitutional Court shall be apprised of the extension of the state of emergency.

Article 8. – The United Nations and the Organization of American States shall be apprised of the suspension of the rights to inviolability of the home and freedom of movement of persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks who are attempting to return to their homes in buildings where they would be at risk, in the provinces of Manabí and Esmeraldas.

Article 9. – Implementation of this Executive Decree, which enters into force as of its date of issue, without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be the responsibility of the Minister of Security Coordination, the Minister of the Interior, the Minister of Defence, the Minister of Finance, the Minister of Health, the Minister for Economic and Social Inclusion and the National Risk Management Secretariat.

DONE in Quito, on 16 June 2016.

(Signed) Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

[Mission permanente de l'Équateur
auprès de l'Organisation des Nations Unie
New York]

N° 4-2-209/2016

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et a l'honneur de se référer à la note n° 4-2-126/2016 par laquelle le Secrétariat a été informé du fait que le Gouvernement de la République de l'Équateur a prorogé l'état d'exception déclaré dans les provinces d'Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Los Ríos et de Guayas par le décret n° 1101 du 16 juin 2016, en raison du séisme qui a récemment frappé l'Équateur et pour ainsi protéger la population des effets néfastes de cette catastrophe naturelle et en assurer la sécurité.

À cet égard, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies tient à informer le Secrétariat de l'Organisation que, conformément à l'article 3 du décret n° 1101, l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement, consacrés au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est suspendu pour les personnes touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques survenus dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prie le Secrétariat de l'Organisation de bien vouloir faire part de cette mesure à tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

[New York, 5 décembre 2016]

[Signé]

[Mission permanente de l'Équateur
auprès de l'Organisation des Nations Unie
New York]

N° 4-2-126/2016

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et l'informe que, à la suite des derniers tremblements de terre survenus en Équateur, le Gouvernement de la République de l'Équateur a prorogé l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Los Ríos et de Guayas, par le décret exécutif n° 1101, afin de protéger la population des effets néfastes de cette catastrophe naturelle et d'en assurer la sécurité.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de bien vouloir informer de cette mesure tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat les assurances de sa très haute considération.

[New York, 11 juillet 2016]

[Signé]

N° 1101

Rafael Correa Delgado
Président constitutionnel de la République

Considérant :

Que le droit de la population à vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, qui garantit la durabilité et le bien vivre, ou *sumak kawsay*, est consacré par l'article 14 de la Constitution de la République de l'Équateur ;

Que l'article 396 de la Constitution de la République de l'Équateur stipule que l'État doit adopter les politiques et mesures nécessaires pour éviter les répercussions négatives sur l'environnement en cas de preuves avérées de dommage et, qu'en présence de doutes quant à l'impact environnemental d'une action ou omission, même sans preuve scientifique de dommage, il doit adopter les mesures de protection appropriées ;

Qu'en application de l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur, il incombe à l'État de protéger les personnes, les collectivités et la nature des effets néfastes provoqués par les catastrophes d'origine naturelle ou anthropique en prévenant les risques, en atténuant les effets des catastrophes, en rétablissant les conditions sociales, économiques et environnementales et en les améliorant en vue de réduire au minimum la vulnérabilité ;

Que, conformément à l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur, l'État assume la direction du système national décentralisé de gestion des risques par l'intermédiaire de l'organisme technique établi par la loi ;

Qu'en application de la loi relative à la sécurité publique et à la sûreté de l'État, le Secrétariat de la gestion des risques dirige le système national décentralisé de gestion des risques ;

Que, conformément à la loi en la matière, il appartient à cet organisme technique, notamment, de faire le lien entre les institutions pour qu'elles coordonnent leur action afin de prévenir et d'atténuer les risques ainsi que d'y faire face, de rétablir les conditions d'avant la situation d'urgence ou la catastrophe et de les améliorer, et de prendre les mesures nécessaires et de les coordonner pour réduire la vulnérabilité, prévenir et atténuer les effets négatifs pouvant résulter d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence sur le territoire national, y faire face et les surmonter ;

Que, le 16 avril 2016, les provinces d'Esmeraldas et de Manabí ont été frappées par des tremblements de terre puis, à des dates ultérieures, par des répliques ;

Que les provinces d'Esmeraldas, de Manabí, de Santo Domingo, de Los Ríos, de Santa Elena et de Guayas ont souffert des effets désastreux de ces événements et qu'il a donc été nécessaire d'y déclarer l'état d'urgence par le décret exécutif n° 1001 du 17 avril 2016.

Que, s'il est compréhensible que les personnes touchées veuillent reprendre une vie normale, leurs foyers sont situés dans des bâtiments qui représentent un risque pour leur vie ou leur intégrité physique, dans les zones frappées par le tremblement de terre du 16 avril 2016 et ses répliques, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour les en empêcher ;

Que le Ministre de la coordination de la sécurité a demandé, dans le communiqué n° MICS-DM-2016-0372 du 14 juin 2016, que l'état d'urgence soit prorogé.

En vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 164, 165 et 166 de la Constitution de la République ainsi que les articles 29 et 36 et les articles suivants de la Loi relative à la sécurité publique et à la sûreté de l'État,

Décète ce qui suit :

Article 1. - L'état d'urgence est prorogé dans les provinces d'Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Los Ríos et de Guayas comme suite aux effets néfastes de la catastrophe naturelle du 16 avril 2016 et de ses répliques.

Article 2. - Il est procédé à la mobilisation des ressources nationales pour les provinces d'Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Los Ríos et de Guayas, de manière à ce que toutes les entités de l'Administration publique centrale et institutionnelle, notamment les forces armées et la police nationale ainsi que les gouvernements autonomes décentralisés des provinces touchées, coordonnent leurs efforts et prennent les mesures voulues pour atténuer et prévenir les risques, pour faire face aux conséquences du tremblement de terre du 16 avril 2016 et de ses répliques, et pour rétablir les conditions d'avant la catastrophe et les améliorer.

Article 3. - L'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement des personnes touchées par le tremblement de terre du 16 avril 2016 et ses répliques est suspendu dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas, du fait que quelques citoyens cherchent à retourner dans leurs foyers situés dans des bâtiments qui constituent un risque pour leur vie ou leur intégrité physique. Il incombe au Ministère de la coordination de la sécurité de définir les modalités d'application de cette mesure pour parvenir à l'objectif voulu.

Article 4. - Il est procédé aux réquisitions nécessaires pour résoudre la crise.

Les réquisitions ont lieu en cas d'extrême nécessité et dans le strict respect du droit applicable.

Article 5. - Le Ministère des finances alloue des ressources suffisantes pour faire face à l'état d'urgence.

Article 6. - L'état d'urgence est prorogé pour une durée de trente jours à partir de la signature du présent décret exécutif et s'applique aux provinces susmentionnées.

Article 7. - L'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle reçoivent notification de la prorogation de l'état d'urgence.

Article 8. - L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains sont notifiées de la suspension de l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement des personnes touchées par le tremblement de terre du 16 avril 2016 et ses répliques qui cherchent à

retourner dans leurs foyers situés dans des bâtiments à risque dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas.

Article 9. - Les Ministres de la coordination de la sécurité, de l'intérieur, de la défense, des finances, de la santé et de l'inclusion économique et sociale et le Secrétariat national de gestion des risques sont en charge de l'application du présent décret exécutif, qui entre en vigueur le jour de sa publication, sans préjudice de sa publication au Registre officiel de l'Équateur.

Fait à Quito, le 16 juin 2016

Le Président constitutionnel de la République
(Signé) Rafael Correa Delgado

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 25 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Équateur

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 25 juillet 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]



MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

No. 4-2-160/2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas, en ocasión de referirse a la Nota Nro. 4-2-133/2016 mediante la cual se comunicó que debido a los eventos telúricos suscitados en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y a fin de precautelar y garantizar la seguridad de sus poblaciones por los efectos adversos de este desastre natural, el Gobierno de la República del Ecuador declaró el Estado de Excepción en estas zonas mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1116 de 15 de julio de 2016, el mismo que regirá durante sesenta días a partir de su suscripción.

Al respecto, la MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, tiene el honor de informar que de acuerdo al Artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1116 se han suspendido los derechos a la libre circulación y a la inviolabilidad de domicilio, contenidos en el Artículo 12, numeral 1, así como en el Artículo 17, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS solicita comedidamente a la Secretaría de las Naciones Unidas que en apego al Artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comunique de tal medida a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 26 de agosto de 2016

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York





MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

No. 4-2-133/2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR saluda muy atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas, en ocasión de informarle que debido a los eventos telúricos suscitados en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y a fin de precautelar y garantizar la seguridad de sus poblaciones por los efectos adversos de este desastre natural, el Gobierno de la República del Ecuador declaró el Estado de Excepción en estas zonas mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1116 de 15 de julio de 2016, el mismo que regirá durante sesenta días a partir de su suscripción.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, en apego al Artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicita muy comedidamente a la Secretaría General comunicar de tal medida a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 25 de julio de 2016

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York



Nº 1116

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*;

Que el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y oportunas;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que de conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo a través del organismo técnico establecido en la ley;

Que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo;

Que de conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre; y, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;

Que el día de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos telúricos ubicados entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, y posteriormente se han presentado réplicas de gran intensidad lo que mantiene la tensión por la situación;

Nº 1116

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Que siendo entendible la intención de los afectados por reanudar su propósito de vida ellos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física, en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y sus réplicas, por lo que es necesario tomar medidas para prevenir esos actos;

Que la Secretaría de Gestión de Riesgos, mediante oficio No. SGR-DES-2016-1025-O de 14 de julio de 2016, solicitó la declaratoria del estado de excepción;

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

DECRETA:

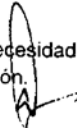
Artículo 1.- DECLARAR el estado de excepción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas por los efectos adversos de este desastre natural.

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia las provincias de: Esmeraldas y Manabí; de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril de 2016 y sus réplicas;

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

Artículo 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.



Nº 1116

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

Artículo 6.- Este estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas.

Artículo 7.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo, en las provincias de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

Artículo 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión Económica y Social; y la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Dado en Quito, a 15 de julio de 2016



Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

[Permanent Mission of Ecuador
to the United Nations
New York]

No. 4-2-160/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and refers to Note No. 4-2-133/2016, in which it informed the Secretariat that owing to the earthquakes in the provinces of Manabí and Esmeraldas, and in order to protect their populations from the adverse effects of that natural disaster and guarantee their safety, the Government of the Republic of Ecuador, by Executive Decree No. 1116 of 15 July 2016, declared a state of emergency in those provinces, which shall remain in effect for sixty days from the date of its signature.

In that connection, the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations has the honour to inform the Secretariat that, in accordance with article 3 of Executive Decree No. 1116, the rights to freedom of movement and inviolability of the home, contained in article 12, paragraph 1, and article 17, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights, have been suspended.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations respectfully requests, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that the United Nations Secretariat inform all States parties to the Covenant of this measure.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

[New York, 26 August 2016]

[Signed]

[Permanent Mission of Ecuador
to the United Nations
New York]

No. 4-2-133/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and wishes to inform the Secretariat that, owing to the earthquakes in the provinces of Manabí and Esmeraldas, and in order to protect their populations from the adverse effects of that natural disaster and guarantee their safety, the Government of the Republic of Ecuador, by Executive Decree No. 1116 of 15 July 2016, declared a state of emergency in those provinces, which shall remain in effect for sixty days from the date of its signature.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations respectfully requests, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, that the United Nations Secretariat inform all States parties to the Covenant of this measure.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

[New York, 25 July 2016]

[Signed]

No. 1116

Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

Whereas:

Article 14 of the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the right of the population to live in a healthy and ecologically balanced environment that guarantees sustainability and good living (*buen vivir/sumak kawsay*);

Article 396 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall adopt timely policies and measures to avoid adverse environmental impacts where there is certainty of harm; and, that, in case of doubt as to the environmental impact stemming from a deed or omission, even where there is no scientific evidence of harm, the State shall adopt timely protective measures;

Article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador provides that the State shall protect persons, communities and nature from the adverse effects of natural or man-made disasters through risk prevention, disaster mitigation, and the restoration and improvement of social, economic and environmental conditions with the aim of minimizing the condition of vulnerability;

Under article 389 of the Constitution of the Republic of Ecuador, the State shall exercise governance over the national decentralized system for risk management through the technical body established by law;

The Public and State Security Act establishes the National Risk Management Secretariat as the governing body of the national decentralized system for risk management;

In accordance with the relevant law, the technical body shall, among other functions, provide a liaison between institutions in order for them to coordinate actions to prevent and mitigate risk, as well as to address risk and restore or improve upon the conditions that existed prior to the occurrence of an emergency or disaster, and carry out and coordinate the necessary actions to reduce vulnerabilities and to prevent, mitigate, respond to and overcome the adverse effects of disasters or emergencies in the national territory;

Seismic events occurred on 16 April 2016 in the provinces of Esmeraldas and Manabí, followed by strong aftershocks, which has prolonged the tension caused by the situation;

As the affected persons, understandably anxious to resume their normal lives, are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk in the areas affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks, it is therefore necessary to take measures to prevent such acts;

The National Risk Management Secretariat, in note No. SGR-DES-2016-1025-O of 14 July 2016, requested the declaration of a state of emergency;

In exercise of the powers conferred on him by articles 164 et seq. of the Constitution of the Republic, and articles 29 and 36 et seq. of the Public and State Security Act,

Decrees:

Article 1. – The state of emergency is hereby declared in the provinces of Manabí and Esmeraldas on account of the adverse effects of this natural disaster.

Article 2. – Provision shall be made for national mobilization in the provinces of Esmeraldas and Manabí; accordingly, all entities of the Central and Institutional Public Administration, and in particular the Armed Forces, the National Police and the autonomous governments of the provinces affected, shall coordinate their efforts to take all necessary and indispensable action to prevent and mitigate risks and to address, remedy and redress the adverse conditions caused by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks.

Article 3. – The rights to inviolability of the home and freedom of movement of persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks in the provinces of Manabí and Esmeraldas are suspended, as some citizens are attempting to return to their homes in buildings where their lives or physical integrity are at risk. The Minister of Security Coordination shall determine the manner in which this measure shall be applied in order to achieve the aforementioned aim.

Article 4. – Such requisitions as are necessary to address the emergency shall be issued. Requisitions shall be issued in cases of extreme necessity and in strict compliance with the laws applicable in such situations.

Article 5. – The Ministry of Finance shall allocate sufficient funds to address the state of emergency.

Article 6. – The state of emergency shall remain in effect for sixty days from the signing of this Executive Decree. The territorial scope of application shall be the aforementioned provinces.

Article 7. – The National Assembly and the Constitutional Court shall be apprised of the declaration of the state of emergency.

Article 8. – The United Nations and the Organization of American States shall be apprised of the suspension of the rights to inviolability of the home and freedom of movement of the persons affected by the earthquake of 16 April 2016 and its aftershocks who are attempting to return to their homes in buildings at risk, in the provinces of Manabí and Esmeraldas.

Article 9. – Implementation of this Executive Decree, which enters into force as of its date of issue, without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be the responsibility of the Minister of Security Coordination, the Minister of the Interior, the Minister of Defence, the Minister of Finance, the Minister of Health, the Minister for Economic and Social Inclusion and the National Risk Management Secretariat.

DONE in Quito, on 15 July 2016.

(Signed) Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

[Mission permanente de l'Équateur
auprès de l'Organisation des Nations Unie
New York]

N° 4-2-160/2016

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et a l'honneur de se référer à la note n° 4-2-133/2016 par laquelle elle a communiqué qu'en raison des tremblements de terre survenus dans les provinces de Manabí et Esmeraldas et afin d'assurer et de garantir la sécurité de ses populations face aux effets néfastes de cette catastrophe naturelle, le Gouvernement de la République de l'Équateur a déclaré l'état d'exception dans ces zones par le Décret exécutif n° 1116 du 15 juillet 2016 qui restera en vigueur pendant soixante jours à partir de sa signature.

À cet égard, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur de faire savoir que, conformément à l'article 3 du Décret exécutif n° 1116, les droits de libre circulation et d'inviolabilité du domicile, figurant au paragraphe 1 de l'article 12 de même qu'au paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont été suspendus.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de l'Organisation de bien vouloir informer de cette mesure tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

[New York, 26 août 2016]

[Signé]

[Mission permanente de l'Équateur
auprès de l'Organisation des Nations Unie
New York]

N° 4-2-133/2016

La Mission permanente de l'Équateur présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et l'informe par la présente qu'en raison des tremblements de terre survenus dans les provinces de Manabí et Esmeraldas et afin d'assurer et de garantir la sécurité de ses populations face aux effets néfastes de cette catastrophe naturelle, le Gouvernement de la République de l'Équateur a déclaré l'état d'exception dans ces zones par le Décret exécutif n° 1116 du 15 juillet 2016 qui restera en vigueur pendant soixante jours à partir de sa signature.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat général de bien vouloir informer de cette mesure tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

[New York, 25 juillet 2016]

[Signé]

N° 1116

Rafael Correa Delgado
Président de la République

Considérant :

Que l'article 14 de la Constitution de la République de l'Équateur reconnaît le droit de la population de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la durabilité et le bien-être, ou *sumak kawsay* ;

Que l'article 396 de la Constitution de la République de l'Équateur prévoit que l'État adopte, lorsqu'il y a un risque avéré de dégâts, des politiques et des mesures propres à prévenir les effets environnementaux néfastes; et, qu'en cas de doute quant à l'incidence d'une action ou d'une omission sur l'environnement, l'État prendra des mesures de protection et toute autre mesure qu'il jugera utile, même en l'absence de preuves scientifiques de dégâts ;

Que l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur dispose que l'État a le devoir de protéger les personnes, les collectivités et la nature des effets néfastes des catastrophes d'origine naturelle ou humaine par la prévention des risques, l'atténuation des effets des catastrophes, le relèvement et l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales, le but étant d'atténuer l'état de vulnérabilité ;

Que, conformément à l'article 389 de la Constitution de la République de l'Équateur, l'État assume la direction du système national décentralisé de gestion des risques par l'intermédiaire de l'organisme technique établi par la loi ;

Que par la loi sur la sécurité publique et nationale, le Secrétariat national de gestion des risques a été désigné comme organe directeur du système national décentralisé de gestion des risques ;

Que, conformément à la loi en vigueur en la matière, l'organisme technique est chargé notamment de réunir les institutions pour qu'elles coordonnent leurs actions destinées à prévenir et à atténuer les risques et à y faire face, ainsi qu'à améliorer les conditions et à rétablir celles qui prévalaient avant la catastrophe ou la situation d'urgence, et que ledit organisme est en outre chargé de réaliser et de coordonner les actions voulues pour réduire la vulnérabilité, pour prévenir et atténuer les éventuels effets néfastes des catastrophes ou des situations d'urgence sur le territoire national et pour se relever ;

Qu'en date du 16 avril 2016, un séisme a frappé les provinces d'Esmeraldas et de Manabí et des répliques de grande intensité s'en sont suivies, ce qui explique la gravité persistante de la situation ;

Qu'alors que les sinistrés, souhaitant légitimement reprendre une vie normale, cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles représentant un danger pour leur vie ou leur intégrité physique dans les zones touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques, il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher ces actes ;

Que le Secrétariat national de gestion des risques, dans sa communication officielle n° SGR-DES-2016-1025-O, en date du 14 juillet 2016, demande que soit décrété l'état d'exception ;

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 164 et suivants de la Constitution de la République et par les articles 29, 36 et suivants de la loi sur la sécurité publique et nationale,

Décète :

Article premier. L'état d'exception est déclaré dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas en raison des effets néfastes de la catastrophe naturelle qui y est survenue.

Article 2. Une mobilisation nationale a lieu pour les provinces d'Esmeraldas et de Manabí, de sorte que toutes les entités de l'administration publique centrale et institutionnelle, en particulier les forces armées, la police nationale et les gouvernements autonomes décentralisés des provinces concernées coordonnent leurs efforts afin de mettre en œuvre les actions indispensables pour réduire et prévenir les risques, ainsi que pour faire face et remédier aux conditions défavorables résultant du séisme du 16 avril 2016 et de ses répliques.

Article 3. L'exercice des droits à l'inviolabilité du domicile et de la liberté de circulation est suspendu pour les personnes ayant été touchées par le séisme et ses répliques qui ont frappé les provinces de Manabí et d'Esmeraldas le 16 avril 2016, car certains citoyens cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles qui représentent un danger pour leur vie ou leur intégrité physique. Le Ministère de la coordination de la sécurité définira les modalités d'application de cette mesure pour atteindre l'objectif visé.

Article 4. Les réquisitions appropriées seront ordonnées pour répondre à l'urgence. Des réquisitions seront prises en cas d'extrême nécessité et dans le strict respect du régime juridique applicable à cette situation.

Article 5. Le Ministère des finances met à disposition des ressources suffisantes aux fins de la bonne application de l'état d'exception.

Article 6. L'état d'exception est déclaré pour une durée de soixante jours à partir de la signature du présent décret. Le champ d'application territorial couvre les provinces susmentionnées.

Article 7. L'instauration de l'état d'exception sera communiquée à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle.

Article 8. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains seront informées de la suspension de l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile et du droit de circuler librement des personnes ayant été touchées par le séisme du 16 avril 2016 et par ses répliques qui cherchent à regagner leur foyer situé dans des immeubles à risque dans les provinces de Manabí et d'Esmeraldas.

Article 9. Les Ministres de la coordination de la sécurité, de l'intérieur, de la défense, des finances, de la santé et de l'intégration économique et sociale, ainsi que le Secrétariat national de gestion des risques, sont responsables de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur à partir de la date de sa délivrance, sans préjudice de sa publication dans le Registre officiel.

Fait à Quito, le 15 juillet 2016.

(signé) Rafael Correa Delgado
Président de la République

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

France

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 22 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 22 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

France

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 22 juillet 2016

[TEXT IN FRENCH – TEXTE EN FRANÇAIS]

« New York, le 22 juillet 2016

MIC/Secpol
N° 2016-540784

Monsieur le Secrétaire général,

Par lettre du 23 novembre 2015, je portais à votre connaissance la déclaration de l'état d'urgence en France à la suite des attentats coordonnés ayant frappé Paris le 13 novembre 2015 et vous priais de bien vouloir considérer que ma lettre constituait une information au titre de l'article 4 du Pacte.

En effet, le Gouvernement français a décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

La gravité des attentats, leur caractère simultané et la permanence de la menace à un niveau inédit sur le territoire national ont ensuite justifié la prorogation de l'état d'urgence, dont je vous ai informé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015 par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 puis pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 et enfin pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016.

Un attentat causant, selon le dernier bilan, la mort de 84 personnes et faisant plus de 350 blessés a été commis à Nice le 14 juillet 2016. Il a été revendiqué par une organisation terroriste. Il fait suite à un attentat commis le 13 juin 2016 au cours duquel deux fonctionnaires de la police nationale ont été assassinés à leur domicile en Ile-de-France par un terroriste se réclamant de la même organisation.

La menace terroriste, caractérisant « un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public », qui a justifié la déclaration initiale de l'état d'urgence et ses prorogations, demeure à un niveau très alarmant qui nécessite de pouvoir disposer de mesures administratives renforcées en vue de lutter contre le terrorisme sur le territoire national.

Le bilan des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence depuis le 14 novembre dernier a confirmé la nécessité de ces mesures pour prévenir d'autres attentats et désorganiser les filières terroristes.

C'est pourquoi l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 pour une durée de six mois. Cette loi modifie par ailleurs certaines des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 afin d'adapter son contenu aux évolutions de fait et de droit.

Parmi les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre de l'état d'urgence, les perquisitions administratives (l de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) seront de nouveau autorisées durant cette période de six mois. Leur utilité sera accrue car elles seront conduites dans le cadre d'un régime rénové, qui permettra notamment l'exploitation de données informatiques, après autorisation du juge.

Le Gouvernement français tient à rappeler que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont soumises à un contrôle juridictionnel effectif ainsi qu'à un mécanisme de suivi et de contrôle particulièrement attentif du Parlement. Enfin, le Gouvernement français veille à une bonne information et concertation avec les élus locaux et entend poursuivre le dialogue avec la société civile.

Le texte de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 est joint à la présente lettre.

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

(Signé) François Delattre

Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ⁽¹⁾

NOR : *INTX1620056L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1^{er}
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'URGENCE

Article 1^{er}

- I. Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence :
- déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
 - et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, puis par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, puis par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
- II. Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
- III. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 2

L'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L'Assemblée nationale et le Sénat ».

Article 3

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels

actes, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »

Article 4

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« *Art. 8-1.* – Dans les zones mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° *bis* et 1° *ter* de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »

Article 5

Le I de l'article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du

juge.

« L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

« En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d'appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l'ordre de perquisition est remise à la personne faisant l'objet d'une perquisition. » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d'une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l'objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l'officier de

police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. »

Article 6

L'article 14-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d'assignation à résidence. »

Article 7

A l'article 15 de la même loi, la référence : « loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions » est remplacée par la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Article 8

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 720-1 et 723-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« *Art. 721-1-1.* – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine

mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. »

Article 9

I. – La section 8 du chapitre III du titre 1^{er} de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. – La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

« Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

« Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.

« Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

« La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.

« En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressé. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.

« Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

« L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

« Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

« Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

« Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

« Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

« S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

« Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

« Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

« 1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

« 2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

« 3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements susmentionnés.

« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.

« Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

« Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an. »

II. – Le chapitre I^{er} du titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 716-1 A ainsi rédigé :

« *Art. 716-1 A.* – Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Article 10

Le dernier alinéa de l'article L. 225-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , renouvelable deux fois par décision motivée ».

Article 11

La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du même code est supprimée.

Article 12

Après l'article 706-24-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-4 ainsi rédigé :

« *Art. 706-24-4.* – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »

Article 13

Le chapitre I^{er} du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 421-5, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° L'article 421-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et 450 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».

Article 14

L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« *Art. 422-4.* – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15

L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« *Art. L. 851-2.-I.* – Dans les conditions prévues au chapitre I^{er} du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.

« II. – L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. »

Article 16

Au début du premier alinéa de l'article L. 511-5 du même code, les mots : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, » sont supprimés.

Article 17

Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 852-1, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 863-2, le mot : « échanger » est remplacé par le mot : « partager ».

Article 18

La section 4 du chapitre 1^{er} du titre 1^{er} du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 411-7 est ainsi modifié :

- a) Le 2° devient le 3° ;
- b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; » ;

2° L'article L. 411-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaire » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7 » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code » ;

3° L'article L. 411-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;

4° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires », sont insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an. »

Article 19

Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Article 20

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes. »

Article 21

I. – A l'article 711-1 du code pénal, au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale et au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1, à la fin de l'article L. 448-1, au premier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1, à l'article L. 897-1 et au premier alinéa de l'article L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

II. – Le I de l'article 9 et l'article 19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 19 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 juillet 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MANUEL VALLS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS

Le ministre de l'intérieur,
BERNARD CAZENEUVE

La ministre de la fonction publique,
ANNICK GIRARDIN

La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN

[TRANSLATION – TRADUCTION]

"New York, 22 July 2016

MLC/Secpol
N° 2016-540784

Sir,

By letter dated 23 November 2015, I brought to your attention the declaration of a state of emergency in France following the coordinated attacks on Paris on 13 November 2015 and requested you to consider my letter a notification for the purposes of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The French Government, by decree No. 2015-1475 of 14 November 2015, decided to implement Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency.

The seriousness of the attacks, their simultaneous nature, and the ongoing unprecedented threat within our borders then necessitated an extension of the state of emergency of which I informed you, for a period of three months, with effect from 26 November 2015, by Act No. 2015-1501 of 20 November 2015, then for a further three months, with effect from 26 February 2016, by Act No. 2016-162 of 19 February 2016, and then for a further two months, with effect from 26 May 2016, by Act No. 2016-629 of 20 May 2016.

An attack which, according to the most recent information, caused the deaths of 84 persons and injured more than 350 others was perpetrated in Nice on 14 July 2016. A terrorist organization has claimed responsibility for the attack, which followed an attack on 13 June 2016 during which two national police officers were murdered at their home in Ile-de-France by a terrorist claiming allegiance to the same organization.

The terrorist threat, representing "an imminent danger arising from serious breaches of public order", which constituted the reason for the initial declaration and extensions of the state of emergency, remains at a highly alarming level, making it necessary to have strengthened administrative measures in place to combat terrorism within our borders.

Assessment of the measures taken since 14 November 2015 in the context of the state of emergency has confirmed the need for such measures to prevent further attacks and disrupt terrorist networks.

For this reason, the state of emergency has been extended for a period of six months by Act No. 2016-987 of 21 July 2016. The Act also modifies certain measures provided for in the Act of 3 April 1955 in order to bring them in line with developments in fact and in law.

Measures authorized under the state of emergency during this six-month period will once again include warrantless searches (article 11, section I, of the Act of 3 April 1955 concerning the state of emergency). Such searches will be more useful than in the past, as they will be carried out as part of a new regime that permits the use of digital information, provided that authorization is given by a judge.

The French Government wishes to recall that the measures taken in the context of the state of emergency are subject to effective judicial monitoring as well as to particularly close oversight and monitoring by Parliamentary machinery. Lastly, the French Government ensures that local elected officials are consulted and kept fully informed and intends to continue its dialogue with civil society.

The text of Act No. 2016-987 of 21 July 2016 is appended herewith.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) François Delattre

Act No. 2016-987 of 21 July 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and introducing measures to strengthen counter-terrorism efforts ⁽¹⁾

NOR: *INTX1620056L*

The National Assembly and the Senate have adopted,
The President of the Republic promulgates the following Act:

**PART I
PROVISIONS ON THE STATE OF EMERGENCY**

Article 1

I. The state of emergency that was declared by Decree No. 2015-1475 of 14 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955 and Decree No. 2015-1493 of 18 November 2015 implementing Act No. 55-385 of 3 April 1955 overseas, and extended by Act No. 2015-1501 of 20 November 2015 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and strengthening its provisions, and subsequently by Act No. 2016-162 of 19 February 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency, and then by Act No. 2016-629 of 20 May 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency, is extended for a period of six months with effect from the date of entry into force of this Act.

II. While it remains in force, the state of emergency shall trigger the application of article 11, section 1, of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency, in the wording given in this Act.

III. The state of emergency may be terminated by decree of the Council of Ministers before the expiry of the extension period. In this case, Parliament shall be informed.

Article 2

Article 4-1 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency shall be amended as follows:

1. The following sentence shall be inserted after the first sentence:

“The administrative authority shall promptly transmit to them copies of all instruments adopted under this Act.”;

2. At the beginning of the second sentence, the word “They” shall be replaced by the words “The National Assembly and the Senate”.

Article 3

Article 8 of Act No. 55-385 of 3 April 1955 shall be amended as follows:

1. In the first paragraph, the words “in particular places of worship in which utterances are

made that incite hatred or violence, incite the commission of terrorist acts or glorify terrorist acts” shall be inserted after the words “of any kind”.

2. The following paragraph shall be added:

“Processions, marches and public gatherings of persons may be prohibited if the administrative authority demonstrates that its available resources do not enable it to ensure the security of such an event.”

Article 4

The following article 8-1 shall be inserted after article 8 of Act No. 55-385 of 3 April 1955:

“Article 8-1. In the areas referred to in article 2 of this Act, the Prefect may, by means of a reasoned decision, authorize the officers referred to in article 16, paragraphs 2 to 4, of the Code of Criminal Procedure and, under their authority, those referred to in article 20 and article 21, paragraphs 1, 1 *bis* and 1 *ter*, of that Code, to conduct the identity checks provided for in the eighth paragraph of article 78-2 of the Code, the visual and physical inspection of items of baggage and the inspection of vehicles moving, stopped or parked on public roads or other places accessible to the public.

“The Prefect’s decision shall state the places concerned, which must be precisely defined, and the duration of the authorization, which must not exceed 24 hours.

“The last three paragraphs of article 78-2-2, section II, and the last two paragraphs of article 78-2-2, section III, of the Code shall apply to operations conducted pursuant to this article.

“The Prefect’s decision referred to in the first paragraph of this article shall be transmitted without delay to the Public Prosecutor.”

Article 5

Article 11, section I, of Act No. 55-385 of 3 April 1955 shall be amended as follows:

1. The following paragraph shall be inserted after the second paragraph:

“Where a search reveals that another site meets the conditions established in the first paragraph of this section I, the administrative authority may authorize by any means the search of that site. That authorization shall be duly regularized at the earliest opportunity. The Public Prosecutor shall be informed promptly.”

2. The fourth paragraph shall be replaced by the following six paragraphs:

“If the search reveals any material, including electronic material, relating to the threat to public order and security posed by the behaviour of the individual in question, the data stored on any computer system or terminal equipment present at the site of the search may be seized, either by copying the data or, if it is not possible to copy or complete the copying of the data during the search, by the seizure of the medium on which the data is stored.

“The copying of data or seizure of computer systems or terminal equipment shall be conducted in the presence of a senior law enforcement officer. The officer under whose responsibility the search is conducted shall prepare an official record of the seizure indicating the reason for the seizure and providing an inventory of the materials seized. A copy of the official record shall be given to the

persons referred to in the second paragraph of this section I. The data and media seized shall be stored under the responsibility of the head of the service having conducted the search. From the time of the seizure, there shall be no access to the seized materials without the prior authorization of a judge.

“Once the search has been completed, the administrative authority shall request the urgent applications judge of the administrative court to authorize the use of the materials. On the basis of the information acquired through the search, the judge shall rule on the lawfulness of the search and on the request from the administrative authority within 48 hours from the time the request is received. Material that is in no way associated with the threat to public order and security posed by the behaviour of the individual in question shall be excluded from the authorization. Subject to the appeal process referred to in the tenth paragraph of this section I, if the urgent applications judge denies authorization, the copied data shall be destroyed and the seized media shall be returned to their owner.

“During such time as is strictly necessary for their use, as authorized by the urgent applications judge, the seized data and media shall be stored under the responsibility of the head of the service having conducted the search. Computer systems and terminal equipment shall be returned to their owner, if necessary after the data they hold has been copied, no later than 15 days from the date of their seizure or the date on which the urgent applications judge, to whom a request has been submitted within that time frame, authorizes the use of the data they hold. With the exception of data that clearly reveals the nature of the threat to public order and security posed by the behaviour of the individual in question, copied data shall be destroyed no later than three months from the date of the search or the date on which the urgent applications judge, to whom a request has been submitted within that time frame, authorizes their use.

“If there are difficulties in accessing the data held on the seized media or in the use of the copied data, the deadlines provided in the eighth paragraph of this section I may, if necessary, be extended for the same length of time by the urgent applications judge, who must receive the request from the administrative authority at least 48 hours before the expiry of the deadline. The urgent applications judge shall rule within 48 hours on the request submitted by the administrative authority for an extension of the deadline. If the use or examination of the seized data and media leads to the detection of an offence, those data and media shall be stored in accordance with the applicable rules of criminal procedure.

“For the purposes of this article, the urgent applications judge is that of the administrative court for the district in which the site of the search is located. The urgent applications judge shall rule in the manner provided in book V of the Code of Administrative Justice, subject to the provisions of this article. An appeal against a decision of that judge may be submitted to the urgent applications judge of the Council of State within 48 hours of notification of the decision. The urgent applications judge of the Council of State shall rule within 48 hours. If an appeal is filed, the seized data and media shall remain stored under the conditions set out in the eighth paragraph of this section I.”;

3. The following paragraph shall be inserted after the fourth paragraph:

“The search shall be the subject of a report transmitted promptly to the Public Prosecutor. A copy of the official record of the seizure shall be attached to the report, where appropriate. The individual subject to the search shall be given a copy of the search order.”;

4. The following eight paragraphs shall be inserted before the final paragraph:

“When there are serious reasons to believe that their behaviour poses a threat to public order and security, persons present at the site of an administrative search may be detained on site by the senior law enforcement officer during such time as is strictly necessary to conduct the search. The

Public Prosecutor shall be informed accordingly as soon as the detention begins.

“Persons so detained shall be informed of their right to have the senior law enforcement officer inform any persons of their choosing and their employer. If the senior law enforcement officer deems it necessary, for reasons related to the detention, not to comply with the request, the officer shall promptly refer the matter to the Public Prosecutor, who shall decide whether or not to comply with the request.

“The duration of the detention shall not exceed four hours from the commencement of the search, and the Public Prosecutor may terminate it at any time.

“A minor shall not be detained without the explicit consent of the Public Prosecutor. A detained minor must be accompanied by his or her legal representative, unless that is duly shown to be impossible.

“The senior law enforcement officer shall state, in an official record, the reasons for the detention, the date and time at which the detention commenced, the date and time at which the detention ended and the duration of the detention.

“That official record shall be presented to the detained individual for signature. If that individual refuses to sign the official record, the refusal and the reasons for it shall be noted in the record.

“The official record shall be transmitted to the Public Prosecutor, after a copy has been given to the individual concerned.

“If the individual is taken into police custody, the length of time of the detention at the site of the search shall be deducted from the amount of time for which he or she may be held in police custody.”

Article 6

The following paragraph shall be added to article 14-1 of Act No. 55-385 of 3 April 1955:

“The condition of urgency shall be deemed to have been fulfilled in the case of an urgent application for judicial review of an order for house arrest.”

Article 7

In article 15 of the same Act, the reference: “Act No. 2015-1501 of 20 November 2015 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and enhancing the effectiveness of its provisions” shall be replaced by the reference: “Act No. 2016-987 of 21 July 2016 extending implementation of Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and introducing measures to strengthen counter-terrorism efforts”.

PART II PROVISIONS RELATING TO THE STRENGTHENING OF COUNTER-TERRORISM EFFORTS

Article 8

Book 5 of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:

1. The following paragraph shall be added to articles 720-1 and 723-1:

“This article shall not apply to individuals convicted of one or more of the offences mentioned

in articles 421-1 to 421-6 of the Criminal Code, with the exception of those defined in articles 421-2-5 to 421-2-5-2 of that Code.”;

2. The following article 721-1-1 shall be inserted after article 721-1:

“Article 721-1-1. Individuals sentenced to imprisonment for one or more of the offences mentioned in articles 421-1 to 421-6 of the Criminal Code, with the exception of those defined in articles 421-2-5 to 421-2-5-2 of that Code, shall not benefit from the remissions of sentence mentioned in article 721 of the present Code. They may however benefit from a remission of sentence under the conditions defined in article 721-1.

Article 9

I. - The following article 58-1 shall be added to Part I, Chapter III, Section 8, of Act No. 2009-1436 of 24 November 2009 (the Prison Act):

“Article 58-1. The prison administration department may process personal data relating to systems for the video surveillance of detention cells within prisons.

“The aim of such processing shall be to ensure the video surveillance monitoring of detention cells in which individuals placed in custody and subject to an isolation measure are held, in cases where the individual’s escape or suicide could have a significant impact on public order in view of the specific circumstances giving rise to that individual’s imprisonment and the impact of those circumstances on public opinion.

“Such processing shall ensure the security of the prison in cases where there is a risk of escape and shall ensure the safety of the individual in custody where there is a risk of suicide.

“Such processing shall relate only to detention cells holding individuals under pretrial detention, who are subject to a warrant for detention in respect of a crime. It shall be commenced only on an exceptional basis.

“The detained individual shall be informed of the proposed decision to place him or her under video surveillance and shall have the right to make written and oral observations, in the context of adversarial proceedings. The detained individual shall have a right to legal counsel on that occasion.

“In cases of urgency, the Keeper of the Seals and Minister of Justice may decide to place the detained individual under video surveillance temporarily if that measure is the only means of preventing his or her escape or suicide. Such temporary video surveillance may not exceed five days. Beyond that period, if no decision has been taken under the aforementioned conditions to place the individual under video surveillance, the video surveillance measure shall be terminated. The period of temporary surveillance shall count towards the total duration of the video surveillance measure.

“The placement of the detained individual under video surveillance shall be subject to a specially reasoned decision taken by the Keeper of the Seals and Minister of Justice, for a renewable three-month period. The detained individual shall be informed of this decision.

“The written opinion of the prison doctor may be sought at any time, in particular before any decision to renew the measure.

“The video surveillance system shall allow the detained individual to be monitored in real time. A screen erected in the cell shall ensure the individual’s privacy while allowing opaque images to be recovered. The cameras shall be placed in a visible position.

“This processing shall involve the recording of all video sequences obtained from the video surveillance of the cells concerned.

“There shall be no sound transmission or recording.

“This video surveillance processing shall not be linked to any biometric device.

“The recorded images that are subject to processing shall be digitally stored for one month.

“If there are serious reasons to believe that the detained individual presents a risk of suicide or escape, the prison warden or his or her representative may consult the video surveillance data for a period of seven days after it was recorded. Beyond that seven-day period, the data may be viewed only in the context of a judicial or administrative inquiry.

“After one month, all data that has not been transmitted to the judicial authority or become subject to an administrative inquiry shall be deleted.

“The persons or categories of persons who, by reason of their functions or in accordance with the needs of the prison service, shall have access to the aforementioned personal data are:

“1. Prison officers individually designated and duly authorized by the prison warden in the case of data viewed in real time;

“2. The prison warden or his or her representative in the case of the consultation, within seven days, of recorded data;

“3. The local information technology officer individually designated and duly authorized by the prison warden.

“The right to lodge an objection, as provided in article 38 of Act No. 78-17 of 6 January 1978 concerning information technology, files and freedoms, shall not apply to the aforementioned processing.

“The rights to access and rectify data, as provided in articles 39 and 40 of the aforementioned Act No. 78-17 of 6 January 1978, shall be exercised in the form of a request to the warden of the prison where the processing of video surveillance is conducted.

“A notice displayed at the entrance to the cell in which a video surveillance system has been installed shall draw attention to the existence of the said system and explain how to access and rectify the data collected.

“Records shall be kept of the creation, updating and consultation of data during processing. These records shall be retained for a period of three months. A record shall be kept of the extraction of recorded video sequences during processing. That record shall be retained for a period of one year.”

II. - The following article 716-1 A shall be added to book V, part II, chapter I, of the Code of Criminal Procedure:

“Article 716-1 A. Individuals placed under judicial examination, accused or charged, who are held in pretrial detention and are subject to a warrant for detention in respect of a crime and an isolation measure, whose escape or suicide could have a significant impact on public order in view of the specific circumstances giving rise to their imprisonment and the impact of those circumstances on public opinion, may be subject to the video surveillance measures provided in article 58-1 of Act No. 2009-1436 of 24 November 2009 (the Prison Act).”

Article 10

The phrase “renewable twice by reasoned decision” shall be added at the end of the last paragraph of article L. 225-2 of the Code of Internal Security.

Article 11

The last sentence of the fifth paragraph of article L. 224-1 of the same Code shall be deleted.

Article 12

The following article 706-24-4 shall be inserted after article 706-24-3 of the Code of Criminal Procedure:

“Article 706-24-4. The total length of the pretrial detention mentioned in the twelfth paragraph of article 11 of Decree No. 45-174 of 2 February 1945 relating to juvenile delinquency shall be increased to two years for the investigation of the offence mentioned in article 421-2-1 of the Criminal Code.

“The total length of the pretrial detention mentioned in the fourteenth paragraph of article 11 of the aforementioned Decree No. 45-174 of 2 February 1945 shall be increased to three years for the investigation of the crimes set out under article 421-1, paragraph 1, and articles 421-5 and 421-6 of the Criminal Code.”

Article 13

Book IV, part II, chapter I, of the Criminal Code shall be amended as follows:

1. In the second paragraph of article 421-5, the word: “twenty” shall be replaced by the word: “thirty”;

2. Article 421-6 shall be amended as follows:

(a) In the first paragraph, the words: “twenty years’ imprisonment and 350,000” shall be replaced by the words: “thirty years’ imprisonment and 450,000”;

(b) In the last paragraph, the words: “thirty years’ imprisonment and” shall be replaced by the words: “life imprisonment and”.

Article 14

Article 422-4 of the Criminal Code shall be worded as follows:

“Article 422-4. Any alien convicted of one of the offences referred to under this part of the Code shall be banned from French territory by the court hearing the case, either permanently or for a maximum of ten years, in accordance with the conditions laid down in article 131-30.

“However, the court may decide, by means of a specially reasoned decision, not to impose this sentence, taking into account the circumstances of the offence and the personality of the perpetrator.”

Article 15

Article L. 851-2 of the Code of Internal Security shall be worded as follows:

“Article L. 851-2.-I. - In accordance with the conditions laid down in part II, chapter I, of the present book, and solely for the purposes of terrorism prevention, individual authorization may be given

for the real-time collection, from the networks of the operators and persons referred to in article L. 851-1, of the information or documents mentioned in the same article L. 851-1 concerning an individual previously identified as being likely to have a connection to a threat. Where there are serious reasons to believe that one or more individuals who are close to the individual concerned by the authorization are likely to provide information regarding the purpose of the authorization, individual authorization may also be granted in respect of each of those individuals.

“II. - Article L. 821-5 shall not apply to an authorization granted pursuant to this article.”

Article 16

At the beginning of the first paragraph of article L. 511-5 of the Code of Internal Security, the words: “When justified by the nature of their work and the circumstances,” shall be deleted.

Article 17

Book VIII of the Code of Internal Security shall be amended as follows:

1. In article L. 852-1, section III, the word: “necessary [for]” shall be replaced by the word “associated [with]”;

2. In the first paragraph of article L. 863-2, the word: “exchange” shall be replaced by the word: “share”.

Article 18

Book IV, part I, chapter I, section 4, of the same Code shall be amended as follows:

1. Article L. 411-7 shall be amended as follows:

(a) Paragraph 2 shall become paragraph 3;

(b) Paragraph 2 shall be worded as follows:

“2. Persons proving, at the time of signature of the contract of engagement, that they have at least three years' service as a police support officer;”;

2. Article L. 411-9 shall be amended as follows:

(a) In the first paragraph, the words “as volunteers” shall be replaced by the words: “under article L. 411-7, paragraphs 2 and 3”;

(b) In the last paragraph, the words “and the reservists mentioned in article L. 411-7, paragraph 2, of the present Code” shall be inserted after the words “national police”;

3. A paragraph worded as follows shall be added to article L. 411-10:

“The persons mentioned in article L. 411-7, paragraph 2, of the present Code may undertake all missions performed by retired national police officers, with the exception of any mission abroad.”;

4. Article L. 411-11 shall be amended as follows:

(a) In the first paragraph, the words: “and the reservists mentioned in article L. 411-7, paragraph 2” shall be inserted after the words “voluntary reservists”;

(b) The following paragraph 3 shall be inserted after paragraph 2:

“3° In the case of the reservists mentioned in paragraph 2 of the same article L. 411-7, one hundred and fifty days per year.”

Article 19

The maximum length of service in the military, civil security, medical or national police reserve corps as provided in article L. 4251-6 of the Defence Code, in article 34, paragraph 11, of Act No. 84-16 of 11 January 1984 on statutory provisions concerning the central government civil service, in article 57, paragraph 12, of Act No. 84-53 of 26 January 1984 on statutory provisions concerning the local government civil service, and in article 41, paragraph 12, of Act No. 86-33 of 9 January 1986 on statutory provisions concerning the health service shall be extended for the total period during which Act No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency is implemented, subject to the employer’s agreement.

Article 20

The following sentence shall be added to the last paragraph of article 15 of Act No. 86-1067 of 30 September 1986 concerning freedom of communication:

“It shall prepare a code of conduct regarding the audiovisual coverage of terrorist acts.”

Article 21

I. - In article 711-1 of the Criminal Code, the first paragraph of article 804 of the Code of Criminal Procedure and the first paragraph of articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1, at the end of article L. 448-1, in the first paragraph of articles L. 545-1, L. 546-1, L. 895-1, L. 896-1, in article L. 897-1 and in the first paragraph of article L. 898-1 of the Code of Internal Security, the reference: “Act No. 2016-731 of 3 June 2016 strengthening efforts to combat organized crime, terrorism and the financing thereof, and enhancing the effectiveness of criminal procedure and the safeguards provided for therein” shall be replaced by the reference: “Act No. 2016-987 of 21 July 2016 extending the application of Act. No. 55-385 of 3 April 1955 concerning the state of emergency and establishing measures to strengthen counter-terrorism efforts”.

II. - Article 9, section I, and article 19 shall be applicable in the Wallis and Futuna Islands, in French Polynesia and in New Caledonia.

Article 19 is applicable in the Terres australes et antarctiques françaises (French Southern and Antarctic Lands).

This Act shall enter into force immediately and shall be implemented as a law of the State.

Done in Paris, on 21 July 2016.

François Hollande

By the President of the Republic:

Manuel Valls
Prime Minister

Jean-Jacques Urvoas
Keeper of the Seals and Minister of Justice

Bernard Cazeneuve
Minister of the Interior

Annick Girardin
Minister of the Civil Service

George Pau-Langevin
Minister for Overseas

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Guatemala

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 28 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU AU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Guatemala

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 juillet 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

*Misión Permanente de Guatemala
ante las Naciones Unidas*

J/1/911

Nueva York, 27 de julio de 2016

Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a usted para remitirle la notificación del Gobierno de Guatemala de conformidad con el artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, el 21 de junio del presente año, el Sr. Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, mediante Decreto Gubernativo No. 2-2016, declaró Estado de Calamidad Pública en el Municipio de Jerez, Departamento de Jutiapa por un plazo de (30) treinta días a partir de la vigencia del Decreto en referencia, como consecuencia de los deslaves provocados por las fuertes lluvias, lo que produjo daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras.

Posteriormente, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, mediante el Decreto Gubernativo 3-2016, el 18 de julio de 2016, decretó prorrogar por (30) treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, por persistir las condiciones que originaron la emisión del Decreto Gubernativo No. 2-2016.

En este sentido, solicito sus buenos oficios para comunicarle a los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el contenido de la notificación y Decreto Gubernativo adjuntos.

Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la muestras de mi más distinguida consideración y estima.



José Alberto Sandoval Cojúlún
Embajador
Representante Permanente

S.E. Sr. Ban Ki-moon
Secretario de las Naciones Unidas
Nueva York

jp

*Ministerio de Relaciones Exteriores
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 21 de julio de 2016.

Clasificación: DH/360-000-481-16

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en seguimiento a la nota No.DH/360-000-416-16, de fecha 27 de junio de 2016, por medio de la cual se dio cumplimiento al artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informando que mediante Decreto Gubernativo número 2-2016, el Señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, el 21 de junio de 2016, declaró Estado de Calamidad Pública en el Municipio de Jerez, Departamento de Jutiapa, por un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto.

Al respecto, me permito adjuntar copia del Decreto Gubernativo 3-2016, mediante el cual, el señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, el 18 de julio de 2016, decretó prorrogar por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, en virtud de que a la fecha persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto Gubernativo número 2-2016.

En virtud de lo anterior, ruego a su Excelencia que por su conducto sean informados los demás Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprovecho la ocasión para expresar al Señor Secretario General, las muestras de mi más alta consideración y estima



Carlos René Morales Moscoso
Ministro de Relaciones Exteriores

Excelentísimo Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
Nueva York

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2016

Guatemala, 18 de julio de 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que el 21 de junio de 2016 el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, en el cual se declaró Estado de Calamidad Pública por el plazo de treinta días, en el municipio de Jerez del departamento de Jutiapa de la República de Guatemala, como consecuencia de los deslaves provocados por las fuertes lluvias en ese municipio y departamento, lo que produjo daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como a la prestación de servicios esenciales, afectando además, la actividad productiva y el desarrollo humano. El Decreto Gubernativo relacionado fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto No. 31-2016 de fecha 23 de junio de 2016.

CONSIDERANDO

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del Decreto Gubernativo relacionado en el considerando anterior, por ello, se hace necesario prorrogar el Estado de Calamidad Pública, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo vence el 20 de julio del año en curso.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32, y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA

ARTÍCULO 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 21 de junio de 2016, y ratificado por el Decreto Número 31-2016 del Congreso de la República de Guatemala, el 23 de junio de 2016.

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se decreta en virtud de que a la fecha persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 21 de junio de 2016.

ARTÍCULO 3. Convocatoria. Convóquese al Congreso de la República de Guatemala, para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese Organismo de Estado informo circunstanciado de los hechos y medidas adoptadas durante la emergencia, así como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plazo del Estado de Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público.


ARTÍCULO 4. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE




JIMMY MORALES CABRERA

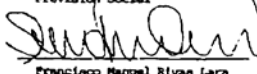

JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA



Rubén Eduardo Morales Moroy
Ministro de Economía



José Guillermo Moreno Gordón
Ministro de Desarrollo Social


Aure Leticia Teague García
Ministra de Trabajo y Previsión Social


Guillermo Roberto Magallán Hernández
Ministro de la Defensa Nacional



Francisco Manuel Rivas Lara
Ministro de Gobernación


Luis Alfonso Chayé Navarro
Ministro de Energía y Minas



Aldo Eduardo García Morales
Ministro de Construcción, Infraestructura y Vivienda


Julio Néstor Estrada Quiñiquez
Ministro de Finanzas Públicas


Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación


Carlos José Aguilar Mucos
Ministro de Relaciones Exteriores


Mario Méndez Montenegro
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


José Alfonso Obeso Becerra
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social


Dr. José Luis Lina Urrutia
Ministro de Cultura y Deportes


Dr. Sydney Alexander Johnson Alford
Ministro
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales


Carlos A. Gallo Gutiérrez
Secretario General
de la Presidencia de la República

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Permanent Mission of Guatemala
to the United Nations

J/1/911
New York, 27 July 2016

Sir,

I have the honour to transmit to you the notification of the Government of Guatemala given pursuant to article 4(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights.

On 21 June 2016, as a result of landslides caused by heavy rainfall that damaged roads, housing, schools, health facilities and other infrastructure, Mr. Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, in concert with the Cabinet, issued Government Decree No. 2-2016 declaring a state of emergency in the municipality of Jerez, department of Jutiapa, for 30 days beginning from the date of entry into force of the decree.

On 18 July 2016, the President of the Republic, in concert with the Cabinet, issued Government Decree No. 3-2016 extending the state of emergency for another 30 days, since the circumstances that gave rise to Government Decree No. 2-2016 continued to exist.

Accordingly, I should be grateful if you would have the attached notification and government decree circulated to the other States Parties to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

[Signed] José Alberto Sandoval Cojulán
Ambassador
Permanent Representative

Ministry of Foreign Affairs of Guatemala

DH/360-000-481-16
Guatemala City, 21 July 2016

Sir,

I have the honour to refer to note No. DH/360-000-416-16 of 27 June 2016, by which you were informed, pursuant to article 4(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 21 June 2016, Mr. Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, in concert with the Cabinet, issued Government Decree No. 2-2016 declaring a state of emergency in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa for 30 days beginning from the date of entry into force of the decree.

In that connection, I am attaching herewith a copy of Government Decree No. 3-2016, dated 18 July 2016, by which Mr. Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, in concert with the Cabinet, extended the state of emergency for another 30 days, since the circumstances that gave rise to Government Decree No. 2-2016 continued to exist.

I should therefore be grateful if you would have the other States Parties to the International Covenant on Civil and Political Rights informed accordingly.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

[Signed] Carlos Raúl Morales Moscoso
Minister for Foreign Affairs

Executive Branch
Office of the President of the Republic
Government Decree No. 3-2016
Guatemala City, 18 July 2016

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

WHEREAS on 21 June 2016 the President of the Republic, in concert with the Cabinet, issued Government Decree No. 2-2016 declaring a 30-day state of emergency in the municipality of Jerez, in Jutiapa department, as a result of the landslides caused by heavy rainfall in the municipality and the department, which had damaged roads, housing, schools, health facilities and other infrastructure and impaired the provision of essential services and production activities and human development; and Government Decree No. 2-2016 was ratified by the Congress of the Republic through Decree No. 31-2016 of 23 June 2016,

WHEREAS the circumstances that gave rise to Government Decree No. 2-2016 continue to exist, making it necessary to extend the state of emergency, which as stipulated in the decree was to expire on 20 July 2016,

THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by articles 1, 2, 3, 138, 139 and 183(f) of the Political Constitution of the Republic of Guatemala and on the basis of articles 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 and 36 of Decree No. 7 of the National Constituent Assembly (Public Order Act),

IN CONCERT WITH THE CABINET,

DECREES AS FOLLOWS:

Article 1. Extension. The state of emergency contained in Government Decree No. 2-2016 of 21 June 2016 and ratified by Decree No. 31-2016 of the Congress of the Republic on 23 June 2016 is hereby extended for another 30 days.

Article 2. Justification. The state of emergency is being extended because the circumstances that gave rise to Government Decree No. 2-2016 of 21 June 2016 continue to exist.

Article 3. Convening of Congress. Within three days, the Congress of the Republic of Guatemala shall convene to consider, ratify, amend or reject this Government Decree. A detailed report of the events that occurred and the measures that were taken during the emergency shall be submitted to Congress in due course, together with the corresponding justifications for extending the state of emergency, as provided in article 32 of the Public Order Act.

Article 4. Entry into force. This Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Central American Gazette.

[Signed] Jimmy Morales Cabrera
President of the Republic of Guatemala

[Signed] Jafeth Ernesto Cabrera Franco
Vice-President of the Republic

[Signed] Rubén Estuardo Morales Monroy
Minister of Economic Affairs

[Signed] José Guillermo Moreno Córdón
Minister for Social Development

[Signed] Aura Leticia Teleguario Sincal de Gonzalez
Minister for Labour and Social Security

[Signed] Williams Alberto Mansilla Fernández
Minister of National Defense

[Signed] Francisco Manuel Rivas Lara
Minister of Interior

[Signed] Luis Alfonso Chang Navarro
Minister for Energy and Mines

[Signed] Aldo Estuardo García Morales
Minister for Communications, Infrastructure and Housing

[Signed] Julio Héctor Estrada Domínguez
Minister for Public Finance

[Signed] Oscar Hugo López Rivas
Minister for Education

[Signed] Carlos Raúl Morales Moscoso
Minister for Foreign Affairs

[Signed] Mario Méndez Montenegro
Minister for Agriculture, Livestock and Food

[Signed] José Alfonso Cabrera Escobar
Minister for Public Health and Welfare

[Signed] José Luis Chea Urruela
Minister for Culture and Sports

[Signed] Dr. Sydney Alexander Samuels Milson
Minister for Environment and Natural Resources

[Signed] Carlos Adolfo Martínez Guiarte
General Secretary, Office of the President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Mission permanente du Guatemala
auprès de l'Organisation des Nations Unies

J/1/911
New York, le 27 juillet 2016

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la communication que le Gouvernement guatémaltèque est tenu de faire en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 21 juin 2016, par le décret gouvernemental no 2-2016 pris en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala, Jimmy Morales, a déclaré l'état de calamité publique dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) pour une durée de trente (30) jours à compter de l'entrée en vigueur dudit décret à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes précipitations, qui ont endommagé des routes, des habitations, des établissements scolaires, des centres de santé et d'autres infrastructures.

Le 18 juillet 2016, par le décret gouvernemental no 3-2016 pris en Conseil des ministres, le Président de la République a prorogé de trente (30) jours l'état de calamité publique, en raison de la persistance des circonstances ayant motivé l'adoption du décret gouvernemental no 2-2016.

À cet égard, je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le texte de la communication et du décret gouvernemental ci-joints.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) José Alberto Sandoval Cojulúm

Ministère des relations extérieures du Guatemala

DH/360-000-416-16
Guatemala, le 21 juillet 2016

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de me référer à la note no DH/360-000-416-16 du 27 juin 2016 par laquelle, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je vous ai informé que par le décret gouvernemental no 2-2016 pris en Conseil des ministres le 21 juin 2016, le Président de la République du Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, avait déclaré l'état de calamité publique dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Vous trouverez ci-joint copie du décret gouvernemental no 3-2016, par lequel le Président de la République du Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, a décidé en Conseil des ministres, le 18 juillet 2016, de proroger de trente jours l'état de calamité publique, en raison de la persistance des circonstances ayant motivé l'adoption du décret gouvernemental no 2-2016.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette information à la connaissance des autres États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Carlos Raúl Morales Moscoso

Organe exécutif
Présidence de la République
Décret gouvernemental no 3-2016
Guatemala, le 18 juillet 2016

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CONSIDÉRANT que le 21 juin 2016, par le décret gouvernemental no 2-2016 pris en Conseil des ministres, le Président de la République a déclaré l'état de catastrophe publique pour une durée de trente jours dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa, République du Guatemala), à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes précipitations dans la municipalité et le département, qui ont endommagé des routes, des habitations, des établissements scolaires, des centres de santé et d'autres infrastructures et perturbé la prestation de services essentiels, nuisant en outre aux activités de production et au développement humain. Par le décret no 31-2016 du 23 juin 2016, le Congrès de la République du Guatemala a ratifié ledit décret gouvernemental.

CONSIDÉRANT que du fait de la persistance des circonstances ayant motivé l'adoption du décret gouvernemental visé au paragraphe précédent, il est nécessaire de proroger l'état de catastrophe publique qui, selon l'échéance fixée dans ledit décret, prend fin le 20 juillet de l'année en cours.

EN CONSÉQUENCE, en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles premier, 2, 3, 138, 139 et 183, alinéa f), de la Constitution de la République du Guatemala et conformément aux dispositions des articles premier, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 et 36 du décret no 7 de l'Assemblée nationale constituante (loi sur l'ordre public),

EN CONSEIL DES MINISTRES,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article premier. Prorogation. L'état de catastrophe publique déclaré par le décret gouvernemental no 2-2016 du 21 juin 2016 et ratifié le 23 juin 2016 par le décret no 31-2016 du Congrès de la République du Guatemala est prorogé de trente jours.

Article 2. Motifs. La prorogation de l'état de catastrophe publique susmentionnée est justifiée par la persistance des circonstances ayant motivé l'adoption du décret gouvernemental no 2-2016 du 21 juin 2016.

Article 3. Convocation. Le Congrès de la République du Guatemala est invité à se réunir afin d'examiner, ratifier, modifier ou rejeter, dans un délai de trois jours, le présent décret. Lui seront communiqués, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi relative à l'ordre public, un rapport circonstancié sur les faits survenus et les mesures prises durant les opérations d'urgence, ainsi que les éléments justifiant la prorogation de l'état de catastrophe publique.

Article 4. Entrée en vigueur. Le présent décret gouvernemental entre en vigueur immédiatement et sera publié au Journal officiel d'Amérique centrale.

Président de la République du Guatemala
(Signé) Jimmy Morales Cabrera

Le Vice-Président de la République
(Signé) Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Le Ministre de l'économie
(Signé) Rubén Estuardo Morales Monroy

Le Ministre du développement social
(Signé) José Guillermo Moreno Córdón

La Ministre du travail et de la prévoyance sociale
(Signé) Aura Leticia Teleguario Sincal de González

Le Ministre de la défense nationale
(Signé) Williams Alberto Mansilla Fernández

Le Ministre de l'Intérieur
(Signé) Francisco Manuel Rivas Lara

Le Ministre de l'énergie et des mines
(Signé) Luis Alfonso Chang Navarro

Le Ministre de la communication, de l'infrastructure et du logement
(Signé) Aldo Estuardo García Morales

Le Ministre des finances publiques
(Signé) Julio Héctor Estrada Domínguez

Le Ministre de l'éducation
(Signé) Oscar Hugo López Rivas

Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Carlos Raúl Morales Moscoso

Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation
(Signé) Mario Méndez Montenegro

Le Ministre de la santé publique et de l'assistance sociale
(Signé) José Alfonso Cabrera Escobar

Le Ministre de la culture et des sports
(Signé) José Luis Chea Urruela

Le Ministre de l'environnement et des ressources naturelles
(Signé) D^r Sydney Alexander Samuels Milson

Le Secrétaire général de la Présidence de la République
(Signé) Carlos Adolfo Martínez Guiarte

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 27 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Pérou

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 27 juillet 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to
the United Nations

7-1-SG/60

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 031-2016-PCM publicado el pasado 12 de mayo, cuya copia se acompaña, se prorrogó por sesenta días, a partir del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Hanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uthuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Hancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Cabe resaltar que oportunamente la Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prórrogas anteriores al Estado de Emergencia declarado en las localidades indicadas, siendo la última comunicada mediante Nota 7-1-SG/49, de fecha 29 de junio de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, complementados en los artículos 9, 11, 12 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17°, 12°, 21° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 26 de julio de 2016

A la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas
Oficina de Asuntos Jurídicos
Sección de Tratados
Fax 3.3693
Nueva York.-



PODER EJECUTIVO

**PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS**

**Prórroga de Estado de Emergencia
declarado en diversos distritos y provincias
de los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica, Cusco y Junín**

**DECRETO SUPREMO
N° 031-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2016-PCM publicado el 15 de marzo de 2016, se prorrogó por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 15 de marzo de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Saicahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de

la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se estableció el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en su Título II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1095 establece que se considera grupo hostil a la Pluralidad de Individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: (i) están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego; y, (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimitó el ámbito de aplicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en las zonas del VRAEM que se encuentran en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento en contrarrestar los remanentes terroristas, así como en la lucha frontal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas, respectivamente;

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno precisar que los remanentes terroristas constituyen un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, teniendo en cuenta el plazo de vigencia del Estado de Emergencia referido en el primer considerando y de acuerdo con lo manifestado por el Director General de la Policía Nacional del Perú, mediante el Oficio N° 311-2016-DGPNP/SA, de fecha 30 de abril de 2016, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y distritos anteriormente indicados, por lo que es necesario prorrogar el mismo, a fin que la presencia de la Policía Nacional del Perú, con sus correspondientes acciones, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, el numeral 1) del artículo 137° de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se estableció el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en su Título II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del Orden Interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho;

en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- Control del Orden Interno

Disponer que la Policía Nacional del Perú asuma el control del Orden Interno en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en los departamentos, provincias y distritos declarados en Estado de Emergencia.

Artículo 4.- De la Intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

La intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 y en el Decreto Legislativo N° 1186, respectivamente, así como a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, que dispone que las Fuerzas Armadas orienten su misionamiento en contrarrestar el accionar de los grupos hostiles (remanentes terroristas) y la Policía Nacional del Perú en su lucha frontal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas.

Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 031-2016-PCM, issued on 12 May 2016 (copy attached), the state of emergency declared in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, has been extended for 60 days, with effect from 14 May 2016.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/49 of 29 June 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 26 July 2016

**Extension of the state of emergency declared in various districts and provinces of the
Departments of Ayacucho, Huancavelica, Cusco and Junín**

Supreme Decree No. 031-2016-PCM

The President of the Republic

Considering:

That, by Supreme Decree No. 017-2016-PCM, issued on 15 March 2016, the state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiway in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, was extended for 60 calendar days, with effect from 15 March 2016;

That Legislative Decree No. 1095 established the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory; and the rules for the use of force in other violent situations, in areas in which a state of emergency has been declared and where the National Police of Peru is responsible for public order, discharging its constitutional duties by using its powers and enforcement capabilities to protect society and defend the rule of law, are set forth in Title II thereof;

That pursuant to article 3 of Legislative Decree No. 1095, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who (i) have a minimum degree of organization; (ii) have the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participate in hostilities or collaborate in their realization;

That Supreme Decree No. 085-2015-PCM, of 10 December 2015, set out the limits of the scope of action of the armed forces and the National Police of Peru in the areas of the valley of the Apurímac, Ene and Mantaro rivers in which a state of emergency has been declared, their mission being to counteract the remaining terrorists and to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities, respectively;

That in this connection, the remaining terrorists constitute a hostile group, falling under the aforementioned definition;

That, noting the period of validity of the state of emergency referred to in the first paragraph, the Director General of the National Police of Peru has reported, in note No. 311-2016-DGPNP/SA of 30 April 2016, that the circumstances that gave rise to the declaration of a state of emergency in the above-mentioned provinces and districts still prevail; and that it is therefore necessary to extend it, in order to enable the population, through the presence and corresponding action of the National Police of Peru, to identify with the ends or objectives sought by the national Government, namely the consolidation of peace in the area and in the country as a whole;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new Supreme Decree;

That Legislative Decree No. 1186, the Legislative Decree regulating the use of force by the National Police of Peru, clarifies the use of force in the performance of police duties, the levels of use of force, the circumstances in which force may be used and the rules of conduct in the use of force;

That Legislative Decree No. 1095 established the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory; and the rules for the use of force in other violent situations, in areas in which a state of emergency has been declared and where the National Police of Peru is responsible for public order, discharging its constitutional duties by using its powers and enforcement capabilities to protect society and defend the rule of law, are set forth in Title II thereof;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiway in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, is hereby extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 14 May 2016.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Maintenance of public order

The National Police of Peru shall be responsible for maintaining public order during the state of emergency declared in article 1 hereof.

The armed forces shall assist the National Police of Peru in achieving this objective in the departments, provinces and districts in which a state of emergency has been declared.

Article 4: Parameters of action by the armed forces and the National Police of Peru

The armed forces and the National Police of Peru shall act in accordance with Legislative Decree Nos. 1095 and 1186, respectively, as well as with the provisions of Supreme Decree No. 085-2015-PCM, which provides that the mission of the armed forces shall be to counteract hostile groups (the remaining terrorists) and the mission of the National Police of Peru shall be to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities.

Article 5: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 11 May 2016.

Ollanta Humala Tasso
President of the Republic

Pedro Cateriano Bellido
President of the Council of Ministers

Jakke Valakivi Álvarez
Minister of Defence

José Luis Pérez Guadalupe
Minister of the Interior

Aldo Vásquez Ríos
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le décret suprême n° 031-2016-PCM, publié le 12 mai 2016 et dont le texte est joint à la présente, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 14 mai 2016, l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d' Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcátan del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/49 du 29 juin 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 26 juillet 2016

Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les districts et provinces des départements d'Ayacucho, de Huancavelica, de Cusco et de Junín

Décret suprême n° 031-2016-PCM

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par le décret suprême n° 017-2016-PCM, publié le 15 mars 2016, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 15 mars 2016 dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín) ;

Que, par le Décret législatif n° 1095, a été établi le cadre légal qui régit les principes, formes, conditions et limites pour l'emploi et l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et que le Titre II de ce Décret énonce les normes sur l'usage de la force en d'autres situations de violence, dans des zones pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré, le contrôle de l'ordre interne étant à la charge de la Police nationale du Pérou dans l'accomplissement de sa fonction constitutionnelle, par l'usage de son potentiel et sa capacité coercitive pour la protection de la société, en défense de l'état de droit ;

Qu'aux termes de l'article 3 du Décret législatif n° 1095, est réputée groupe hostile toute pluralité d'individus se trouvant sur le territoire national et réunissant les trois conditions suivantes : i) avoir un degré minimum d'organisation ; ii) posséder la capacité d'affronter l'État et être décidé à le faire, de manière prolongée, au moyen d'armes à feu ; iii) participer aux hostilités ou collaborer à leur réalisation ;

Que par le décret suprême n° 085-2015-PCM, en date du 10 décembre 2015, a été délimité le champ d'action des forces armées et de la Police nationale du Pérou dans les zones de la vallée des rivières d'Apurímac, d'Ene et de Mantaro se trouvant sous régime d'état d'urgence, leur mission consistant dans l'ensemble à combattre les terroristes restants et à mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites, respectivement ;

Que, dans cet ordre d'idées, il convient de préciser que les terroristes restants constituent un groupe hostile, étant donné qu'ils réunissent les conditions précitées ;

Que, compte tenu du délai d'application de l'état d'urgence mentionné au premier alinéa et conformément à ce qui a été précisé par le Directeur général de la Police nationale du Pérou, dans la communication officielle n° 311-2016-DGPNP/SA, en date du 30 avril 2016, sont encore présentes les conditions qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces et districts susmentionnés, d'où la nécessité de le proroger, afin que la présence de la Police nationale du Pérou permette, moyennant la prise des mesures correspondantes par elle, que la population s'identifie aux buts ou objectifs recherchés par le Gouvernement national, à savoir la consolidation de la pacification de la zone et du pays ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Que, conformément au Décret législatif n° 1186, qui régit l'usage de la force par la Police nationale du Pérou, l'usage de la force dans l'exercice de la fonction policière est requise, ainsi que les niveaux de son usage, de même que les circonstances et règles de conduite applicables à l'usage de la force ;

Que, par le Décret législatif n° 1095, a été établi le cadre légal qui régit les principes, formes, conditions et limites pour l'emploi et l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et que le Titre II de ce Décret énonce les normes sur l'usage de la force en d'autres situations de violence, dans des zones pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré, le contrôle de l'ordre interne étant à la charge de la Police nationale du Pérou dans l'accomplissement de sa fonction constitutionnelle, par l'usage de son potentiel et sa capacité coercitive pour la protection de la société, en défense de l'état de droit ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décrète :

Article premier – Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 14 mai 2016 l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).

Article 2 – Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 – Maintien de l'ordre public

La Police nationale du Pérou assure le maintien de l'ordre public pendant toute la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier du présent décret.

Les forces armées soutiennent la Police nationale du Pérou dans la réalisation de cet objectif dans les départements, provinces et districts placés sous le régime de l'état d'urgence.

Article 4 – De l'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou

L'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou obéit aux conditions prévues par les Décrets législatifs n^{os} 1095 et 1186, respectivement, et aux dispositions du décret suprême n^o 085-2015-PCM, qui donne pour mandat aux forces armées de combattre les agissements des groupes hostiles (les terroristes restants) et à la Police nationale du Pérou de mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites.

Article 5 – Contrescoring

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le onze mai deux mille seize.

Le Président de la République
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de la défense
Jakke Valakivi Álvarez

Le Ministre de l'intérieur
José Luis Pérez Guadalupe

Aldo Vásquez Ríos
Le Ministre de la justice et des droits de l'homme

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 27 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Pérou

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 27 juillet 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to
the United Nations

7-1-SG/61

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 020-2016-PCM publicado el pasado 24 de marzo, cuya copia se acompaña, se declara por el término de cuarenta y cinco días, el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash.

Cabe resaltar que oportunamente la Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prorrogas anteriores al Estado de Emergencia en la localidad indicada, mediante Nota 7-1-SG/50 de fecha 29 de junio de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio, contemplados en los incisos 9 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 26 de julio de 2016



A la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas
Oficina de Asuntos Jurídicos
Sección de Tratados
Fax 3.3693
Nueva York.-

PODER EJECUTIVO

**PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS**

**Prorrogan Estado de Emergencia declarado
en las provincias del Santa y Casma del
departamento de Áncash**

**DECRETO SUPREMO
N° 020-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, mediante Oficio N° 185-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú recomienda se prorrogue el Estado de Emergencia declarado en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash, a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en sus diferentes modalidades y restablecer el principio de autoridad, sustentando dicha petición en el Oficio N° 063-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú y en el Informe N° 006-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF, del Departamento de Planeamiento Operativo de la División de Policía de Chimbote de la Policía Nacional del Perú, por medio de los cuales se comunica que aun cuando la declaratoria del Estado de Emergencia ha permitido disminuir la incidencia delictiva en dichas provincias, como resultado del accionar de la Policía Nacional del Perú, a través de intervenciones en delitos flagrantes, patrullajes preventivos y operativos policiales, no se ha logrado revertir del todo la situación que dio lugar a la emisión del Estado de Emergencia declarado a través del Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, por lo que resulta necesaria la prórroga;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2016, se declaró por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia

Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 26 de marzo de 2016, en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 020-2016-PCM issued on 24 March 2016 (copy attached), a state of emergency has been declared for 45 days in the Provinces of Santa and Casma, Department of Ancash.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/50 of 29 June 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended, with the aim of consolidating peace in the area and in the country.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 26 July 2016

Extension of the state of emergency in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash

Supreme Decree No. 020-2016-PCM

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That, by means of note No. 185-2016-DGPNP/SA, the Director General of the National Police of Peru recommended the extension of the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, in order to strengthen the fight against insecurity and organized crime in its various forms, and restore the principle of authority, basing that recommendation on note No. 063-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, from the National Directorate of Police Operations of the National Police of Peru, and report No. 006-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF, from the Operational Planning Department of the Chimbote Police Division of the National Police of Peru, which report that, even though the declaration of a state of emergency has reduced the crime rate in those provinces, as a result of the actions of the National Police of Peru, including action taken in the case of flagrant offences and preventive and operational police patrols, it has not been possible to completely reverse the situation which led to the declaration of a state of emergency by means of Supreme Decree No. 009-2016-PCM, hence the need for an extension;

That, by Supreme Decree No. 009-2016-PCM, published in the Official Journal, El Peruano, on 10 February 2016, a state of emergency was declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, for a period of forty-five (45) calendar days;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new Supreme Decree;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, is hereby extended for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from 26 March 2016. During the state of emergency, the National Police of Peru shall maintain public order.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the extension of the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 23 March 2016.

Ollanta Humala Tasso
President of the Republic

Pedro Cateriano Bellido
President of the Council of Ministers

José Luis Pérez Guadalupe
Minister of the Interior

Aldo Vásquez Ríos
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n°020-2016-PCM, publié le 24 mars 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours, dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash).

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/50 du 29 juin 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 26 juillet 2016

**Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma
(département d'Áncash)**

Décret suprême n° 020-2016-PCM

Le Président de la République,

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation ;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et l'obligation d'en informer le Congrès et la Commission permanente, pour une durée déterminée, dans la totalité ou une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire ;

Que, par la communication n° 185-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale du Pérou recommande que l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) soit prorogé afin de renforcer la lutte contre l'insécurité publique et la criminalité organisée sous toutes ses formes et de rétablir le principe d'autorité, cette recommandation étant appuyée par la communication n° 063-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE de la Direction nationale des opérations policières de la Police nationale du Pérou et par le rapport n° 006-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF du Département de la planification des opérations de la Division de la police de Chimbote (Police nationale du Pérou), dans lesquels il est exposé que même si la déclaration de l'état d'urgence a contribué à réduire le taux de criminalité dans ces provinces grâce à l'action de la Police nationale du Pérou, qui est intervenue dans des cas de flagrant délit, a effectué des patrouilles de prévention et a mené des opérations policières, elle n'a pas permis d'éliminer totalement les facteurs ayant motivé l'instauration, par le décret suprême no 009-2016-PCM, de l'état d'urgence, qui doit donc être prorogé ;

Que, par décret suprême n° 009-2016-PCM publié dans le journal officiel « El Peruano » du 10 février 2016, l'état d'urgence a été déclaré pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif) ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier – Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter du 26 mars 2016, l'état d'urgence dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash). La Police nationale du Pérou maintiendra l'ordre public.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-trois mars deux mille seize.

Le Président de la République
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de l'intérieur
José Luis Pérez Guadalupe

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme
Aldo Vásquez Ríos

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ukraine

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 6 July 2016

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 July 2016

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Ukraine

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 juillet 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 juillet 2016

[TEXT IN ENGLISH – TEXTE EN ANGLAIS]

“The Permanent Mission of Ukraine to the United Nations presents its compliments to the Secretary-General of the United Nations and, with the reference to its Verbal Notes No. 4132/28-194/501-803 of 5 June 2015 and No. 4132/28-194/501-1987 of 24 November 2015, has the honor to convey the following information in accordance with the obligations of the Government of Ukraine under Article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.

In February 2014, the Russian Federation launched armed aggression against Ukraine and illegally occupied a part of the territory of Ukraine – the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, and today exercises overall effective control over certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine. These actions are in gross violation of the Charter of the United Nations, the Charter of the Council of Europe, other legally binding international instruments and constitute a threat to democracy, human rights and rule of law in Europe. The Russian Federation, as the Aggressor State and Occupying Power, bears full responsibility for respect of human rights in temporarily occupied territories of Ukraine under international humanitarian law, as well as in accordance with international human rights law.

Ongoing armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, together with war crimes and crimes against humanity committed both by regular Armed Forces of the Russian Federation and by the illegal armed groups guided, controlled and financed by the Russian Federation, constitutes a public emergency threatening the life of the nation in the sense of Article 4, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights.

In order to ensure the vital interests of the society and the State, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and other Ukrainian authorities adopted legal acts, which constituted the derogation from certain obligations of Ukraine under the International Covenant on Civil and Political Rights, among them the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Combating Terrorism” regarding the preventive detention of persons, involved in terrorist activities in the anti-terrorist operation area for a period exceeding 72 hours” of 12 August 2014, the Law of Ukraine “On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding the special regime of pre-trial investigation under martial law, in state of emergency or in the anti-terrorist operation area” of 12 August 2014, the Law of Ukraine “On Administering Justice and Conducting Criminal Proceedings in Connection with the Anti-terrorist Operation” of 12 August 2014 and the Law of Ukraine “On Military and Civil Administrations” of 3 February 2015.

On the above-mentioned basis the Ukrainian Side exercised its right to derogate from its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights on the territory of certain areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, which are under control of the Government of Ukraine, and informed the Secretary-General of the United Nations of the measures which Ukrainian authorities had taken and the reasons therefor by the Verbal Note No. 4132/28-194/501-803 of 5 June 2015.

On 24 November 2015 by the Verbal Note No. 4132/28-194/501-1987 the Ukrainian Side specified areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, covered by the derogation submitted by the Government of Ukraine on the basis of the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine N462-VIII of 21 May 2015.

One year after the adoption of the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On Derogation from Certain Obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” No. 462-VIII of 21 May 2015, Ukrainian authorities reviewed the security situation in certain areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, which fall within the scope of derogation. According to the security, defense and law enforcement agencies of Ukraine, it remains tense and fragile. In defiance of the Minsk agreements, the illegal armed groups and Russian Armed Forces place firing positions in residential neighborhoods of the occupied settlements and, using heavy weapons prohibited by the Minsk agreements, continue to shell the positions of the Ukrainian Armed Forces.

The official statistics show that, as of 30 May 2016, at least 6,380 attacks from Russian-backed militants against Ukraine's Armed Forces have been reported since the beginning of this year. 42 Ukrainian soldiers have been killed and 350 have been wounded. The facts of disregard by the Russian occupation forces of the Minsk agreements in terms of the withdrawal of heavy weapons are constantly recorded. From the beginning of 2016, 699 cases of the presence of tanks, artillery systems of over 100 mm caliber, MLRS's and mortars near the contact line have been confirmed.

In June 2016, security situation in Donbas started to rapidly deteriorate. Russia-led terrorist forces continued to blatantly violate ceasefire and heavy weapons withdrawal commitments under the Minsk agreements. They widely used heavy weapons, mostly mortars and high caliber artillery. As a result, 7 Ukrainian soldiers were killed and 18 were wounded between 16 and 21 June. On 22 June 2016, 1 Ukrainian soldier was killed and 11 were wounded; over 300 mortar shells and more than 160 projectiles were fired at Ukrainian positions. Current shelling intensity is similar to an active fighting phase of August 2015.

On 22 June 2016, OSCE SMM monitors were shelled with mortars by pro-Russian militants in Donetsk region. The fire came from 82mm caliber mortars, which had to be withdrawn under the Minsk agreements.

The uncontrolled border remains a critical impediment to the de-escalation as Russia continues sending its weaponry, regular troops and mercenaries to Donbas. On 27 May - 3 June 2016, Russia supplied through the uncontrolled sections of the Ukrainian state border to Donbas nearly 2500 tons of fuel, more than 160 tons of ammunition, 9 MLRS "Grad", 2 self-propelled artillery systems "Akatsiya", 36 "T-72" tanks and 6 armored vehicles. On 22 June 2016, 2 self-propelled howitzers, 6 infantry fighting vehicle, 6 howitzers and 10 trucks were brought from the Russian territory to the town of Chervonopartyzansk in Luhansk region.

The fact that the situation in the East of Ukraine remains tense and volatile is confirmed by numerous reports of international organizations, operating in the conflict-affected area, and in the first place by the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. According to the Fourteenth report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on the situation of human rights in Ukraine, based on the work of HRMMU, from mid-April 2014 to 15 May 2016 OHCHR recorded 30,903 casualties in the conflict area in eastern Ukraine, among Ukrainian armed forces, civilians and members of the armed groups. This includes 9,371 people killed and 21,532 injured (para. 3).

The Ukrainian Side, having established that the circumstances which led to submitting the derogation still prevail, has found it necessary to continue to exercise in relation to the situation in certain areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, which are under control of the Government of Ukraine, the powers described in above-mentioned legislative acts. To the extent that the exercise of these powers may be inconsistent with the obligations imposed by the International Covenant on Civil and Political Rights, the Ukrainian Side has availed itself of the right of derogation conferred by Article 4, paragraph 1, of the Covenant and will continue to do so until further notice.

In pursuance of Article 4, paragraph 3, of the Covenant the Permanent Mission of Ukraine to the United Nations has the honour to transmit the reviewed list of localities in Donetsk and Luhansk oblasts under control/partially controlled by the Government of Ukraine as of 14 June 2016.

The Permanent Mission of Ukraine to the United Nations emphasises once again the need to adopt a very careful approach for the establishment of facts as to whether the areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, which as specified in this Verbal Note, are partially controlled by the Government of Ukraine, are under effective overall control and jurisdiction of either Ukraine or the Russian Federation as an Aggressor State. All jurisdictional organs should take into account the particular circumstances of each case at a given moment in time.

The Permanent Mission of Ukraine to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.

Enclosure: as stated, on 2 pages.

6 July 2016"

**Lists of localities in Donetsk and Luhansk oblasts under control/partially controlled
by the Government of Ukraine**
(as of June 14, 2016)

DONETSK OBLAST

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Bahmutskyi	1900	under control of Ukrainian authorities	11360 km ² (49.7%)
2.	Velykonovosilkivskyi	1900		
3.	Volodarskyi	1200		
4.	Dobropilskyi	950		
5.	Pokrovskyi	1300		
6.	Lymanskyi	1000		
7.	Oleksandrivkyi	1010		
8.	Mangushskyi	800		
9.	Sloviansky	1300		

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Volnovakhskyi	2500	partially controlled by Ukrainian authorities	6700 km ² (29.3%)
2.	Konstantynivskyi	1200		
	Maryinskyi	1400		
	Baikivskyi	800		
	Yasynuvatskyi	800		

N°	Cities of regional subordination	Surface (km ²)		
1.	Avdiivka	29.53	under control of Ukrainian authorities	1136.93 km ² (30.6%)
2.	Bahmut	40		
3.	Vugledar	5.32		
4.	Toretsk	61.9		
5.	Mymograd	22.75		
6.	Dobropillya	19.8		
7.	Druzhkivka	46.53		
8.	Kramatorsk	355.7		
9.	Lyman	18.2		
10.	Pokrovsk	39.25		
11.	Konstantynivka	66		
12.	Mariupol	244		
13.	Novogrodivka	5.55		
14.	Selidove	108.2		
15.	Sloviansk	74.2		

Donetsk oblast	26592 km² <i>(total surface)</i>	under control of Ukrainian authorities	12496.93 km ²	47%
		partially controlled by Ukrainian authorities	6700 km ²	25.2%
		under control of the illegal armed groups	7394.78 km ²	27.8%

LUHANSK OBLAST

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Bilovodskiyi	1596.96	under control of Ukrainian authorities	14918.73 km ² (58.89%)
2.	Bilokurakynskiyi	1435.81		
3.	Kreminskyyi	1635.2		
4.	Markivskyyi	1166.48		
5.	Milovskyyi	971.05		
6.	Novoaidarskyyi	1535.78		
7.	Novopskovskyyi	1623.08		
8.	Svativskyyi	1739.29		
9.	Starobilskyyi	1581.98		
10.	Troyitskyyi	1633.1		

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Stanychno-Luhanskyyi	1896.48	partially controlled by the Ukrainian authorities	3221.23 km ² (12.71%)
2.	Popasnyanskyyi	1324.75		

N°	Cities of regional subordination	Surface (km ²)		
1.	Lysychansk	95.64	under control of Ukrainian authorities	187.4 km ² (13.44%)
2.	Rubizhne	33.76		
3.	Severodonetsk	58		

Luhansk oblast	26684 km² <i>(total surface)</i>	under control of Ukrainian authorities	16238.06 km ²	60.85%
		partially controlled by the Ukrainian authorities	6323.53 km ²	23.7%
		under control of the illegal armed groups	4123.22 km ²	15.45%

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, se référant à ses notes verbales n° 4132/28-194/501-803, du 5 juin 2015, et 4132/28-194/501-1987, du 24 novembre 2015, a l'honneur, conformément aux obligations incombant à son gouvernement en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de lui communiquer ce qui suit.

En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et entrepris d'occuper illégalement une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol. Aujourd'hui, elle exerce un contrôle effectif sur certains districts des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, de la Convention du Conseil de l'Europe et d'autres instruments internationaux juridiquement contraignants, mais font peser une menace sur la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Europe. En vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, c'est à la Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et Puissance occupante, qu'il incombe de faire pleinement respecter les droits de l'homme dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.

L'agression armée que la Fédération de Russie continue de mener contre l'Ukraine, ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis tant par les forces armées régulières de la Fédération de Russie que par les groupes armés illégaux qu'elle dirige, contrôle ou finance, constituent un danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Afin de protéger les intérêts vitaux de la société et de l'État, le Conseil suprême d'Ukraine, le Conseil des ministres et d'autres autorités étatiques ont pris des mesures dérogeant à certaines obligations imposées à l'Ukraine par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Citons notamment la loi portant modification de la loi ukrainienne du 12 août 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, concernant la détention préventive des personnes suspectées d'activités terroristes dans la zone d'opération antiterroriste pour une durée supérieure à 72 heures, la loi ukrainienne du 12 août 2014 portant modification du Code ukrainien de procédure pénale, concernant le régime spécial de l'enquête d'instruction en cas d'instauration de la loi martiale ou de l'état d'urgence ou dans la zone d'opération antiterroriste, la loi ukrainienne du 12 août 2014 relative à l'administration de la justice et à la conduite de l'action pénale en lien avec la lutte antiterroriste, et la loi ukrainienne du 3 février 2015 relative aux administrations militaire et civile.

Sur le fondement de ces textes, l'Ukraine a exercé son droit à déroger aux obligations que lui impose le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le territoire de certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk sous le contrôle de son gouvernement et, dans la note verbale n° 4132/28-194/501-803 en date du 5 juin 2015, informé le Secrétaire général de l'ONU des mesures que les autorités ukrainiennes avaient prises, en en indiquant les motifs.

Le 24 novembre 2015, par la note verbale n° 4132/28-194/501-1987, l'Ukraine a indiqué quelles étaient les zones des régions de Donetsk et Louhansk auxquelles s'appliquait la dérogation présentée par le Gouvernement ukrainien en application de la résolution N462-VIII du Conseil suprême d'Ukraine en date du 21 mai 2015.

Un an après l'adoption de la résolution n° 462-VIII du Conseil suprême d'Ukraine en date du 21 mai 2015 concernant la dérogation à certaines obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les autorités ukrainiennes ont procédé à l'examen de la situation sur le plan de la sécurité dans les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk auxquelles s'applique la dérogation. Selon les institutions ukrainiennes chargées de la sécurité, de la défense et de la police, la situation reste tendue et instable. Faisant fi des accords de Minsk, les groupes armés illégaux et les forces armées russes installent des postes de tir dans des quartiers résidentiels des zones occupées et, à l'aide d'armes lourdes dont l'utilisation est proscrite par les accords de Minsk, continuent de bombarder les positions des forces armées ukrainiennes.

Selon les statistiques officielles, au 30 mai 2016, au moins 6 380 attaques avaient été lancées par des rebelles soutenus par la Russie contre les forces armées ukrainiennes depuis le début de l'année, faisant 42 morts et 350 blessés parmi les soldats ukrainiens. On ne cesse de faire état de nouvelles violations par les forces d'occupation russes des dispositions des accords de Minsk prévoyant le retrait des armes lourdes. Depuis le début de 2016, on a signalé la présence de tanks, de systèmes d'artillerie de calibre 100 mm ou plus, de lance-roquettes multiples et de mortiers près de la ligne des contacts à plus de 699 reprises.

En juin 2016, la situation dans la région du Donbass a commencé à se détériorer rapidement. Les forces terroristes dirigées par la Russie ont continué à violer ouvertement les engagements pris dans les accords de Minsk concernant le cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes. Elles ont fait un usage massif d'armes lourdes, principalement de mortiers et de pièces d'artillerie de gros calibre, ce qui a entraîné la mort de 7 soldats ukrainiens entre le 16 et le 21 juin 2016, 18 autres ayant été blessés. Le 22 juin 2016, un soldat ukrainien a été tué et 11 autres blessés; les positions ukrainiennes ont essuyé plus de 300 tirs de mortier et plus de 160 tirs de projectiles. Les bombardements sont aujourd'hui aussi violents que ceux observés au plus fort des combats d'août 2015.

Le 22 juin 2016, des membres de la Mission spéciale d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont essuyé des tirs de mortiers de rebelles pro-russes dans la région de Donetsk. Les tirs provenaient de mortiers de calibre 82 mm, qui auraient dû être éliminés en application des accords de Minsk.

La frontière n'étant pas surveillée, les conditions d'un apaisement du conflit ne sont toujours pas réunies, la Russie continuant d'envoyer des armes, des soldats de son armée régulière et des mercenaires dans le Donbass. Entre le 27 mai et le 3 juin 2016, la Russie a introduit dans le Donbass près de 2 500 tonnes d'essence, plus de 160 tonnes de munitions, 9 lance-roquettes multiples « Grad », 2 pièces d'artillerie automotrices « Akatsiya », 36 tanks « T-72 » et 6 véhicules blindés, en les faisant passer par les zones non surveillées de la frontière ukrainienne. Le 22 juin 2016, 2 obusiers automoteurs, 6 véhicules de combat d'infanterie, 6 obusiers et 10 camions en provenance de Russie ont été introduits dans la ville de Tchervonopartyzansk, dans la région de Louhansk.

Les organisations internationales présentes dans la région, et notamment la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, ont confirmé dans de nombreux rapports les tensions et l'instabilité que connaît l'est de l'Ukraine. Dans son quatorzième rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine, établi à partir des travaux de la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine dans la période allant de la mi-avril 2014 au 15 mai 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a comptabilisé 30 903 victimes parmi les forces armées ukrainiennes, les civils et les groupes armés dans la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine, parmi lesquelles 9 371 morts et 21 532 blessés (par. 3).

Considérant que perdurent les circonstances l'ayant conduit à présenter une dérogation, l'Ukraine estime nécessaire de continuer à exercer les pouvoirs visés dans les textes susmentionnés eu égard à la situation régnant dans certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk sous le contrôle de son gouvernement. Dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs peut être contraire aux obligations imposées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine se prévaut, jusqu'à nouvel ordre, du droit de dérogation prévu au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.

En application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l'Ukraine transmet ci-joint la liste actualisée des localités des régions de Donetsk et de Louhansk qui, au 14 juin 2016, étaient sous le contrôle total ou partiel du Gouvernement ukrainien.

La Mission permanente de l'Ukraine souligne encore une fois qu'il convient de procéder avec précaution quand il s'agit de déterminer si les zones des régions de Donetsk et de Louhansk visées dans la présente note verbale sont sous le contrôle partiel du Gouvernement ukrainien ou sous le contrôle effectif et la juridiction soit de l'Ukraine, soit de la Fédération de Russie en tant qu'État agresseur. Tous les organes juridictionnels devraient tenir compte des circonstances propres à chaque cas au moment considéré.

La Mission permanente de l'Ukraine saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très haute considération.

Annexe : comme indiqué (liste de 2 pages).

6 juillet 2016

**Listes des localités des régions de Donetsk et de Louhansk
sous le contrôle total ou partiel du Gouvernement ukrainien
(au 14 juin 2016)**

Région de Donetsk

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Bakhmout	1 900	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	11 360 km ² (49,7 %)
2.	Velika Novosilka	1 900		
3.	Volodarskoïe	1 200		
4.	Dobropolsk	950		
5.	Pokrovsk	1 300		
6.	Liman	1 000		
7.	Oleksandrivka	1 010		
8.	Mangouch	800		
9.	Slovyansk	1 300		

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Volnovakha	2 500	Sous le contrôle partiel des autorités ukrainiennes	6 700 km ² (29,3 %)
2.	Kostyantynivka	1 200		
	Marinka	1 400		
	Boïkivske	800		
	Yasinouvata	800		

N°	Villes de la région	Surface (km ²)		
1.	Avdiivka	29,53	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	1 136,93 km ² (30,6 %)
2.	Bakhmout	40,00		
3.	Vougledar	5,32		
4.	Toretsk	61,90		
5.	Mirnograd	22,75		
6.	Dobropillya	19,80		
7.	Droujkivka	46,53		
8.	Kramatorsk	355,70		
9.	Liman	18,20		
10.	Pokrovsk	39,25		
11.	Kostyantynivka	66,00		
12.	Marioupol	244,00		
13.	Novogrodivka	5,55		
14.	Selidove	108,20		
15.	Slovyansk	74,20		

Région de Donetsk	26 592 km ² (surface totale)	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	12 496,93 km ²	47 %
		Sous le contrôle partiel des autorités ukrainiennes	6 700 km ²	25,2 %
		Sous le contrôle des groupes armés illégaux	7 394,78 km ²	27,8 %

Région de Louhansk

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Bilovodsk	1 596,96	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	14 918,73 km ² (58,89 %)
2.	Bilokourakyne	1 435,81		
3.	Kreminna	1 635,20		
4.	Markivka	1 166,48		
5.	Milove	971,05		
6.	Novoaidar	1 535,78		
7.	Novopskov	1 623,08		
8.	Svatove	1 739,29		
9.	Starobilsk	1 581,98		
10.	Troïtske	1 633,10		

N°	District	Surface (km ²)		
1.	Stanytsya Louhanska	1 896,48	Sous le contrôle partiel des autorités ukrainiennes	3 221,23 km ² (12,71 %)
2.	Popasna	1 324,75		

N°	Villes de la région	Surface (km ²)		
1.	Lysytchansk	95,64	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	187,4 km ² (13,44 %)
2.	Roubijne	33,76		
3.	Severodonetsk	58,00		

Région de Louhansk	26 684 km² <i>(surface totale)</i>	Sous le contrôle des autorités ukrainiennes	16 238,06 km ²	60,85 %
		Sous le contrôle partiel des autorités ukrainiennes	63 23,53 km ²	23,7 %
		Sous le contrôle des groupes armés illégaux	4 123,22 km ²	15,45 %